

Programa de Gestión Integral de los Riesgos  
en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR)  
BIRF 8867-AR

# Anexo 8.

## Marco de Política de Reasentamiento

Marco de Gestión Ambiental y Social

Octubre de  
2019



Ministerio de Agricultura,  
Ganadería y Pesca  
**Argentina**

# ÍNDICE

<b>I. PRESENTACION Y OBJETIVO DEL MPR .....</b>	<b>4</b>
<b><del>II. DESCRIPCION DEL PROGRAMA.....</del></b>	<b><del>5</del></b>
II.1. OBJETIVOS.....	5
II.2. COMPONENTES.....	5
II.2.1. Componente 1: Fortalecimiento de los sistemas de información sobre el sistema agroindustrial argentino y su exposición a los riesgos agroclimáticos y de mercado .....	5
II.2.2. Componente 2: Inversiones para la Mitigación de Riesgos. ....	6
II.2.3. Componente 3: Instrumentos de respuesta a emergencias y transferencias de riesgos agroclimáticos .....	6
II.3. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA PREPARACION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO .....	7
<b>III. MARCO JURÍDICO.....</b>	<b>9</b>
III.1.1. Normas relacionadas con reasentamiento poblacional.....	9
III.1.2. Normativa Nacional relacionada a la adquisición de predios .....	10
III.1.2.1. Constitución Nacional .....	10
III.1.2.2. Normativa Nacional .....	10
III.1.3. Normativa Nacional sobre servidumbre administrativa .....	12
III.1.4. Normas y criterios aplicables a los ocupantes del espacio público .....	13
<b>IV. LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES DE REASENTAMIENTO .....</b>	<b>14</b>
IV.1. ARREGLOS INSTITUCIONALES Y RESPONSABILIDADES .....	14
IV.2. TIPOS DE PLAN DE REASENTAMIENTO, CONTENIDOS DE LOS PLANES DE REASENTAMIENTO Y CONFORMACION DE EQUIPO DE TRABAJO .....	15
IV.3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y CATEGORÍAS DE AFECTACIÓN .....	16
IV.4. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN .....	17
IV.5. ARTICULACIÓN DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO CON LAS ETAPAS TÉCNICAS DEL SUBPROYECTO .....	18
<b>V. EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE REASENTAMIENTO.....</b>	<b>19</b>
V.1. FINANCIAMIENTO DE LOS PLANES DE REASENTAMIENTO .....	19
V.2. CONSULTAS Y RECLAMOS .....	19
V.3. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PLANES DE REASENTAMIENTO .....	20
<b>VI. CONSULTA DEL MPR .....</b>	<b>20</b>
<b>VII. APÉNDICES.....</b>	<b>22</b>
APÉNDICE I. TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS INCORPORADOS A LA CONSTITUCION NACIONAL .....	23
APÉNDICE II. MARCO JURÍDICO Y PARTICULARIDADES DEL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO NACIONAL .....	25
APÉNDICE III. METODOLOGIA NACIONAL PARA CALCULAR LA VALUACION DE LA SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA .....	33
APÉNDICE IV. CAPACIDAD DE UCAR PARA LA IDENTIFICACIÓN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE REASENTAMIENTO .....	37
APÉNDICE V. ANÁLISIS DE LA OP 4.12 Y LA NORMATIVA NACIONAL .....	38
APÉNDICE VI. NOTAS DE DIFUSIÓN Y CORREOS ELECTRÓNICOS DE LA CONSULTA DEL MPR REMITIDAS A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES .....	43
APÉNDICE VII. RESPUESTAS A LA CONSULTA DEL MPR .....	56

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Normativa en materia de expropiación por provincia .....	11
Tabla 2. Normativa en materia de servidumbre administrativa por provincia .....	12
Tabla 3. Comparación tasación nacional y OP 4.12 .....	31
Tabla 4. Categorías de Afectación .....	35

## I. PRESENTACION Y OBJETIVO DEL MPR

Las obras de infraestructura rural pueden causar desplazamiento de actividades y/o personas, pérdida de tierras y otros activos económicos, y problemas sociales y ambientales. En dichos proyectos, el Banco Mundial promueve la aplicación de la Política Operacional 4.12 (PO 4.12), destinada a evitar o mitigar impactos adversos y asegurar que las personas afectadas por un reasentamiento no resulten en una situación peor que 'sin proyecto', en una concepción integral de la relación entre el derecho de propiedad y otros derechos esenciales que hacen a la dignidad humana.

El presente Marco de Política de Reasentamiento Involuntario, en adelante MPR, forma parte del Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural, en adelante GIRSAR.

El MPR tiene como propósito garantizar que, una vez agotadas las posibilidades de evitar o reducir el reasentamiento involuntario, las personas que deban relocarse o que pierdan terrenos u otros activos económicos sean apoyadas durante su relocalización, compensadas adecuadamente por sus pérdidas, y apoyadas en sus esfuerzos por mejorar sus niveles de vida o al menos mantener los niveles que tenían antes de ser desplazadas o antes del comienzo de la ejecución del Programa.

El objetivo del MPR es establecer el marco de procedimiento bajo el cual el Programa gestionaría el reasentamiento involuntario de población en el caso que alguna de sus actividades así lo requiriera. Para ello, y dado que aún no es posible identificar los Subproyectos y sus potenciales impactos en términos de reasentamiento, el MPR establece las bases para la preparación, implementación, monitoreo y evaluación de los planes de reasentamiento que deban elaborarse para los Subproyectos que generen reasentamiento involuntario, en los términos definidos en el párrafo siguiente.

Este MPR reconoce y adopta la definición de 'reasentamiento involuntario' de la PO 4.12. Según la misma, esta política operacional se aplica ante la privación involuntaria de tierras, que da por resultado: (i) el desplazamiento o la pérdida de la vivienda; (ii) la pérdida de los activos o del acceso a los activos; (iii) la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia.

Se entiende que la privación de activos es 'involuntaria' porque quien posee el dominio o tenencia de los mismos, no tiene la opción de negarse a su uso o afectación para el Programa. Es decir, se aplica ante la existencia de un propietario u ocupante que no puede decidir libremente acerca de si presta su consentimiento frente a las limitaciones que se le imponen respecto al bien que posee y/u ocupa.

El MPR se basa en la legislación argentina, en las normas aplicables de carácter internacional ratificadas por el gobierno argentino y en los principios generales de la Política Operativa 4.12 del Banco Mundial sobre Reasentamiento Involuntario, que abarca los efectos económicos y sociales directos resultantes de las actividades del Programa<sup>1</sup> y causados por:

- a) la privación involuntaria de tierras, que da por resultado: el desplazamiento o la pérdida de la vivienda; la pérdida de los activos o del acceso a los activos, o la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban

trasladarse a otro lugar o no.

- b) la restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la ley como parques o zonas protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la subsistencia de las personas desplazadas.

## II. DESCRIPCION DEL PROGRAMA

### II.1. OBJETIVOS

El objetivo del Programa GIRSAR es contribuir a fortalecer la resiliencia del sistema agroindustrial, en especial entre los actores más vulnerables, a través de la reducción de la vulnerabilidad y exposición de los productores a riesgos climáticos y de mercados.

### II.2. COMPONENTES

#### II.2.1. *Componente 1: Fortalecimiento de los sistemas de información agroclimática*

**Subcomponente 1.1.** Desarrollo de Herramientas y Sistemas. El Subcomponente 1.1. pretende consolidar e integrar información agro-meteorológica, productiva, y de precios generada por varias instituciones y entidades públicas y privadas. Con base a esta consolidación e integración se producirán, directa o indirectamente, herramientas y productos para el análisis probabilístico de riesgos de mercado y de clima.

**Subcomponente 1.2.** Desarrollo de la Capacidad Institucional. El subcomponente 1.2. pretende fortalecer y desarrollar capacidades de instituciones y entidades nacionales y provinciales que participan del Programa a través del desarrollo de planes provinciales y soporte del sistema de información. Asimismo, este subcomponente promoverá la disponibilidad de datos en plataformas de open data, y fomentará el desarrollo de soluciones de software por el sector privado.

---

<sup>1</sup> Cabe señalar que la política de reasentamiento involuntario se aplica a todos los componentes del Programa que resulten en reasentamiento involuntario, independientemente de cual sea su fuente de financiamiento. Se aplica asimismo a las demás actividades que resulten en reasentamiento involuntario y que, a juicio del Banco, a) tengan relación directa y considerable con el Programa financiado por el Banco, b) sean necesarias para lograr los objetivos enunciados en los documentos del Programa, y c) se lleven a cabo, o que estén previstos para llevarse a cabo simultáneamente con el Programa.

## **II.2.2.** *Componente 2: Inversiones para la Mitigación de Riesgos Agropecuarios.*

**Subcomponente 2.1.** Fortalecimiento Institucional para la Gestión de los Riesgos Agropecuarios. El propósito de este subcomponente es fortalecer las capacidades provinciales para la gestión integrada de riesgo agro-industrial; elaborar las estrategias de cadena y planes provinciales; formular proyectos de mitigación de riesgo y estudios de pre-inversión para acciones priorizadas en las estrategias y planes.

**Subcomponente 2.2.** Inversiones públicas. El propósito de este subcomponente es reducir el impacto de riesgos agro-climáticos priorizados por los planes provinciales y estrategias de cadena, a través de proyectos provinciales y nacionales para la mitigación del riesgo (combinaciones de obras de infraestructura, bienes, servicios, servicios de consultoría y costos recurrentes).

**Subcomponente 2.3:** Adopción de Tecnologías de Agricultura Climáticamente Inteligente. El propósito de este subcomponente es promover la adopción a nivel de finca de tecnologías validadas para mejorar la resiliencia de los sistemas de producción agropecuarios, a través de incentivos económicos para la adopción tecnológica; capacitación y servicios de asistencia técnica; y acciones de investigación adaptativa y validación de tecnologías.

## **II.2.3.** *Componente 3: Instrumentos de respuesta a emergencias y transferencias de riesgos agroclimáticos*

Este componente busca fortalecer el marco institucional y mejorar el mecanismo de respuesta para emergencias en general, con especial énfasis en el apoyo a los estratos socioeconómicos más vulnerables.

**Subcomponente 3.1.** Fortalecimiento del Sistema de gestión de la emergencia agropecuaria. Se financiarán acciones para el fortalecimiento institucional del Sistema, entre las que se encuentran: La actualización de bases de datos, desarrollo de plataformas de carga, consulta y visualización, capacitaciones al personal abocado a emergencias agropecuarias en el MAI, implementación del RUPE (Registro Único de Productores en Emergencia) y realización de estudios, entre otras.

**Subcomponente 3.2.** Desarrollo de instrumentos de financiamiento del riesgo agropecuario. El propósito del subcomponente es desarrollar nuevos instrumentos de financiamiento del riesgo agropecuario asociado a la emergencia agropecuaria.

**Subcomponente 3.3.** Financiamiento de primas para la adquisición de los instrumentos del riesgo agropecuario. Este subcomponente involucra el pago de primas y costos relacionados con la adquisición e implementación de instrumentos financieros piloto propuestos en el Subcomponente 3.2, con el fin último de generar un efecto demostrativo, en el marco de la Emergencia Agropecuaria.

### II.3. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA PREPARACION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO

En relación al GIRSAR se destaca que ninguna de las inversiones y/o actividades previstas se encuentra incluida en la Lista Negativa que nombra las actividades que, por razones de riesgos ambientales y/o sociales altos, están excluidas de ser financiadas en el marco del Programa.

Si bien las salvaguardas son aplicables a todo el Programa en general, considerando las acciones y actividades de todos los componentes del GIRSAR, se entiende que las intervenciones que podrían producir algún tipo de reasentamiento son especialmente las asociadas al Subcomponente 2.2 de infraestructura.

Se trata de Subproyectos de infraestructura y manejo de recursos naturales que plantean una intervención territorial combinando la construcción de infraestructura para el desarrollo rural y la mitigación de riesgos agro-climáticos con la implementación de componentes blandos de transferencia de tecnología, capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento institucional. Algunos ejemplos del tipo de las actividades que podrían financiarse a través de este Subcomponente son las relacionadas con: ordenamiento territorial, planificación del uso de suelo y manejo de cuencas, electrificación rural, sistemas de riego y drenaje, caminos rurales, entre otros.

Dado que no es posible determinar *a priori* la localización de los Subproyectos a ejecutarse en el marco del GIRSAR y si producirán o no algún tipo de reasentamiento, este MPR establece los principios que se seguirán y los lineamientos que se aplicarán en los casos en que se identifique que como producto de la implementación de un Subproyecto se da una situación de: a) privación involuntaria de tierras<sup>2</sup>; y/o b) restricción involuntaria del acceso a zonas calificadas por la ley como parques o zonas protegidas, con los consiguientes efectos adversos para la subsistencia de las personas desplazadas.

En caso que se determine que alguna actividad del Programa genere el reasentamiento involuntario de población en los términos indicados previamente, se requerirá la formulación de un Plan de Reasentamiento (PR) de acuerdo a los lineamientos que aquí se establecen.

El alcance de estos Planes de Reasentamiento estará relacionado con el grado de afectación que genere el Programa.

Será objetivo de los Planes de Reasentamiento<sup>3</sup> que se formulen:

---

<sup>2</sup> Que de por resultado: el desplazamiento o la pérdida de la vivienda; la pérdida de los activos o del acceso a los activos, o la pérdida de las fuentes de ingresos o de los medios de subsistencia, ya sea que los afectados deban trasladarse a otro lugar o no.

<sup>3</sup> Si bien en el documento se utiliza el término genérico “Plan de reasentamiento”, por la dimensión de las obras de que se trata y los impactos previstos, en parte de los casos será necesario elaborar Planes de reasentamiento abreviados, en función del número de afectados y el tipo de afectación, de acuerdo a lo dispuesto en la OP 4.12.

- Mitigar y compensar los impactos por el desplazamiento involuntario cuando éste sea inevitable y sea causado por las actividades del Programa.
- Mejorar, o al menos restablecer, los medios de subsistencia y las condiciones socio económicas de la población desplazada por las actividades del Programa.
- Garantizar que el reasentamiento se lleve a cabo de conformidad con la legislación provincial y nacional vigente.
- Garantizar que las acciones propuestas sean conocidas previamente por las personas afectadas y se formulen con su participación.
- Convertir el reasentamiento en una oportunidad para contribuir al desarrollo de los reasentados, facilitando la participación de los mismos en los beneficios del Programa que genera el reasentamiento.

La preparación de los planes de reasentamiento estará de acuerdo con los principios que se enumeran a continuación.

- **Minimizar el desplazamiento de población:** Dados los impactos negativos que genera el reasentamiento involuntario, siempre que sea posible se lo evitará o minimizará. Por ello, cada sub- proyecto analizará detalladamente todas las opciones viables, con el fin de sugerir la que evite o minimice este desplazamiento.
- **Restablecimiento de Condiciones Socioeconómicas:** Se diseñarán y ejecutarán planes para asistir a la población desplazada por los reasentamientos involuntarios en el restablecimiento o mejoramiento de sus condiciones socio económicas.
- **Inclusión:** Tendrán derecho a ser asistidos en el restablecimiento de su hábitat o actividad económica afectada, todos los ocupantes de sitios intervenidos por las actividades y obras del Programa que estén identificados en los censos que se llevarán a cabo, independientemente de la forma de tenencia que acrediten.
- **Equidad:** El acompañamiento social y técnico de los Planes de Reasentamiento serán proporcionales a los impactos causados por el desplazamiento.
- **Igualdad:** Toda persona desplazada recibirá, frente a iguales situaciones de tenencia y de categoría de afectación, el mismo tratamiento y accederá en condiciones de equidad a los programas de asistencia para el restablecimiento de condiciones socioeconómicas que se establezcan.
- **Comunicación:** La población desplazada recibirá información clara, veraz y oportuna sobre sus derechos, deberes y el estado en que se encuentra su proceso.
- **Consulta:** La población desplazada será informada sobre las soluciones de reasentamiento y los planes que se formulen para ello y se tomarán en cuenta sus opiniones para el diseño de dichas soluciones y planes.
- **Transparencia:** El proceso se manejará de manera objetiva y técnica con el fin de garantizar que el proceso de reasentamiento cubra a toda la población afectada por las obras, que los criterios de elegibilidad sean claros y transparentes y que se apliquen de manera equitativa para todos los afectados.
- **Celeridad:** Las Entidades Responsables de la ejecución de las acciones y actividades relacionadas con los reasentamientos asignarán los recursos físicos, humanos, administrativos y financieros necesarios para su ejecución en el tiempo previsto.



### III. MARCO JURÍDICO

Este Marco de Política de Reasentamiento se apoya en las normas aplicables de carácter internacional ratificadas por el Gobierno de la República Argentina, en las declaraciones y garantías constitucionales y normas nacionales y provinciales, así como en los principios generales del derecho, jurisprudencia y doctrina que establecen las pautas para la adquisición de predios, la tasación de los bienes afectados y la protección de los derechos de personas desplazadas por proyectos de desarrollo.

El ordenamiento jurídico argentino reconoce, consagra y garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada en el texto de su Constitución Nacional. En consecuencia, cuenta con un plexo normativo -en el orden nacional y provincial- que establece el procedimiento expropiatorio a través del cual los Estados o sujetos expropiantes pueden privar y quitar la propiedad a los particulares, en el interés superior de la utilidad pública y el bien común, de manera tal que no lesione las garantías constitucionales antedichas.

Por otro lado, respecto de los gobiernos de las Provincias, el art 121 de la Constitución Nacional menciona lo siguiente: “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal y el que expresamente se hayan reservado, por pactos especiales, al tiempo de su incorporación.” Esto, quiere decir, que las provincias tienen la facultad de disponer sobre sus tierras y establecer limitaciones en terrenos ubicados bajo su jurisdicción, incluyendo procesos de expropiación y servidumbres, siempre basadas en principios de utilidad pública.

Este marco jurídico expropiatorio satisface las exigencias troncales y sustanciales de la política de salvaguarda del banco mundial para los reasentamientos involuntarios plasmados en la OP 4.12. La justa indemnización que estas normas regulan busca restablecer la situación patrimonial del sujeto expropiado en las mismas condiciones en que se encontraba antes de ser privado de su propiedad.

#### III.1.1. *Normas relacionadas con reasentamiento poblacional*

La República Argentina no cuenta con una normativa que regule específicamente brindar un servicio de asistencia y asesoramiento para la relocalización, reasentamiento, readquisición de inmuebles y restablecimiento de los medios de subsistencia a las personas que -como consecuencia de la ejecución de proyectos de infraestructura- deban ser desalojados de su lugar de residencia habitual o lugar de actividad económica.

No obstante, existe un plexo normativo genérico, conformado por normas, tanto nacionales como internacionales, que definen las obligaciones que asume el Estado de propiciar a todos los habitantes lo conducente al desarrollo humano, a un ambiente sano, al progreso económico con justicia social y al acceso a una vivienda digna. Derechos todos, de incidencia en la cuestión en análisis, que se encuentran previstos en la Constitución Nacional, -que incluso ha incorporado a partir de su reforma del año 1994, una serie de pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos, dándoles jerarquía constitucional, y en normas de inferior rango, como la ley de expropiación o la de Política Ambiental Nacional.

En el Apéndice I se incluye la referencia a los tratados internacionales relacionados con el tema en tratamiento, que la Argentina ha ratificado.

### *III.1.2. Normativa Nacional relacionada a la adquisición de predios*

#### III.1.2.1. Constitución Nacional

La Constitución de la Nación Argentina, en el artículo 17 consagra el principio de la inviolabilidad de la propiedad y establece que ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. También pauta que en los casos en que se proceda a la expropiación por causa de utilidad pública, la misma deberá ser calificada por ley y que previo a la expropiación se debe proceder a la indemnización.

#### III.1.2.2. Normativa Nacional

La Ley Nacional 21.499, resulta reglamentaria de lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Según esta norma legal, pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la “utilidad pública”, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o privado, sean cosas o no.

La expropiación se referirá específicamente a bienes determinados. También podrá referirse genéricamente a los bienes que sean necesarios para la construcción de una obra o la ejecución de un plan o proyecto; en tal caso la declaración de utilidad pública se hará en base a informes técnicos referidos a planos descriptivos, análisis de costos u otros elementos que fundamenten los planes y programas a concretarse, mediante la expropiación de los bienes de que se trate, debiendo surgir la directa vinculación o conexión de los bienes a expropiar con la obra, plan o proyecto a realizar. En caso de que la declaración genérica de utilidad pública se refiriese a inmuebles, deberán determinarse, además, las distintas zonas, de modo que a falta de individualización de cada propiedad queden especificadas las áreas afectadas por la expresada declaración.

Como se ha indicado, además de la normativa nacional, existen normas locales, con vigencia exclusiva dentro del ámbito de las provincias, dado el status autonómico que revisten en el sistema federal argentino, que incluso pueden avanzar hacia un grado mayor de protección de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico federal.

Así, la expropiación de tierras para la ejecución de obras de utilidad pública, fundada en una ley previa que lo declara, está prevista en las normas de expropiación nacional y provinciales que aseguran la justa indemnización del valor de la propiedad de la cual se ve privado el sujeto desplazado o expropiado. En líneas generales, las normas de expropiación nacionales y provinciales prevén:

- Los principios en los que se basa esta indemnización
- Lo métodos de valuación del bien objeto de la expropiación
- Las acciones judiciales y procedimientos para la defensa de los derechos de los sujetos expropiados, que abarca el cuestionamiento de los fundamentos de la expropiación, la impugnación de la valuación del bien y el monto de la indemnización, la retrocesión del bien expropiado al particular en determinados casos y otros institutos que la persona

expropiada puede hacer valer ante la autoridad judicial en defensa de sus derechos.

Un caso particular se presenta además para las obras viales, cuyas marco normativo a nivel nacional y provincial cuenta con normativa específica para la ejecución de expropiaciones vinculadas a las mismas.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca no reviste facultades específicas en relación a expropiaciones. En relación a esto, y considerando que -como se ha indicado- las intervenciones del Programa que tienen potencial de producir algún tipo de reasentamiento son especialmente las asociadas a los Subproyectos del Subcomponente 2.2 de infraestructura que serán ejecutados por las provincias que adhieran al Proyecto; se espera que las potenciales expropiaciones serán llevadas a cabo por las provincias con arreglo a la legislación provincial específica que corresponda.

A continuación se presenta un listado no exhaustivo de la legislación provincial en materia de expropiación.

**Tabla 1. Normativa en materia de expropiación por provincia**

PROVINCIA	NORMATIVA
BUNOS AIRES	Ley N° 5.708, y su modificación Ley N° 7.177 Expropiación
CATAMARCA	Ley N° 2.210 Declaración de utilidad Pública y sujeta a Expropiación de Inmuebles Privados con Dueños
CHACO	Ley N° 2.289, y su modificación Ley N° 5.757 Régimen de Expropiación
CHUBUT	Ley N° 45 Expropiaciones y Servidumbres Administrativas
CORDOBA	Ley N° 6.394 Régimen de Expropiación
CORRIENTES	Ley N° 1.487 Régimen de Expropiaciones
ENTRE RIOS	Ley N° 6.467 Régimen de Expropiación
FORMOSA	Ley N° 82 Régimen de Expropiación
JUJUY	Ley N° 3.018 Expropiación
LA PAMPA	Ley N° 908 (norma jurídica de Facto) Expropiación
LA RIOJA	Ley N° 4.511 Expropiación
MENDOZA	Decreto Ley N° 1.447/75
MISIONES	Ley N° IV-14 Expropiación
NEUQUEN	Ley N° Provincial N° 804 (con modificaciones introducidas en las Leyes Provinciales N° 896 y N° 971)
RIO NEGRO	Ley N° 1015, Reglamentada por Decreto 1866/74
SALTA	Ley N° 2614 de Expropiación
SAN JUAN	Ley N° 7.966 General de Expropiación
SAN LUIS	Ley N° V-0128-004 General de Expropiaciones
SANTA CRUZ	Ley N° 3.389 Expropiación
SANTA FE	Ley N° 7.534 Expropiación
SANTIAGO DEL ESTERO	Ley N° 4.630 Expropiación
TIERRA DEL FUEGO	Ley N° 421 Expropiación
TUCUMAN	Ley N° 5.006 Régimen General de Expropiaciones

Por otra parte, en el Apéndice II de este documento se presenta –a modo de ejemplo– el marco jurídico y particularidades del procedimiento expropiatorio de acuerdo a la normativa nacional.

### III.1.3. Normativa Nacional sobre servidumbre administrativa

Siguiendo la línea de lo mencionado en párrafos anteriores, el Código Civil y Comercial de la Nación (aprobado por Ley 26.994) establece en su artículo 1970, que las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción.

Asimismo, indica que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial (Art. 240).

Las limitaciones a la propiedad privada se disponen considerando cuestiones de interés público o generales de la comunidad. Una de estas limitaciones es la servidumbre, que consiste genéricamente en la utilidad que presta un inmueble a favor de otro. El Código Civil y Comercial la define como “el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno” (art. 2162). La servidumbre puede tener por objeto la totalidad o una parte material del inmueble ajeno (art. 2163). Por este derecho el propietario del fundo sirviente está obligado a no hacer alguna cosa o a soportar que la haga el propietario del fundo dominante en el predio sirviente. Se trata de un derecho real, por cuanto se ejerce sobre el inmueble, y no sobre su propietario, en cuyo caso se trataría de una obligación personal.

Cuando el Estado -sea la Nación, las provincias o los municipios-, actuando en ejercicio del poder público, impone servidumbres a los propietarios o poseedores de inmuebles con un fin público o de interés general, se trata de servidumbres administrativas y son regidas, como se mencionara previamente, por el derecho administrativo.

Las servidumbres administrativas se distinguen de las servidumbres civiles o privadas no sólo por el interés público que motiva su constitución, sino además porque sólo requieren de una propiedad sirviente (la que recibe la limitación), sin que necesariamente deba existir un fundo dominante. Las servidumbres administrativas no tienen una regulación genérica, sino que cada una de ellas cuenta con normas específicas.

A continuación se presenta un listado no exhaustivo de la legislación provincial en materia de servidumbre administrativa.

**Tabla 2. Normativa en materia de servidumbre administrativa por provincia**

PROVINCIA	NORMATIVA
BUNOS AIRES	Ley 1476 Régimen Servidumbre de Ductos
CATAMARCA	Decreto Ley 2.577 Ley de Aguas (Servidumbres Administrativas)
CHACO	Sin legislación específica identificada
CHUBUT	Ley N° 45 Expropiaciones y Servidumbres Administrativas
CORDOBA	Sin legislación específica identificada
CORRIENTES	Sin legislación específica identificada

ENTRE RIOS	Decreto Ley 5.926, Ley 7.495 Servidumbre Administrativa de Electroducto
FORMOSA	Ley N° 173 Servidumbres Administrativas
JUJUY	Ley N° 5.915 Servidumbres Administrativas
LA PAMPA	Ley N° 1.476 Régimen de Servidumbres Administrativas de Ductos
LA RIOJA	Decreto Ley N° 4.295 Código de Aguas
MENDOZA	Ley de Avalúos N°7.637 (Servidumbres Administrativas)
MISSIONES	Sin legislación específica identificada
NEUQUEN	Sin legislación específica identificada
RIO NEGRO	Ley N° 2952 Código de Aguas (Servidumbres Administrativas)
SALTA	Ley N° 7.017 Código de Aguas (Servidumbres Administrativas)
SAN JUAN	Ley 4.049 y modificatorias Ley 8.07 y 8.123 Servidumbres Administrativas
SAN LUIS	Ley N° V 063-2008 Régimen de Servidumbres Administrativas de Ductos
SANTA CRUZ	Sin legislación específica identificada
SANTA FE	Ley N° 10.742 Servidumbres Administrativas de Electroductos
SANTIAGO DEL ESTERO	Sin legislación específica identificada
TIERRA DEL FUEGO	Sin legislación específica identificada
TUCUMAN	Sin legislación específica identificada

En el Apéndice III se presenta la metodología para calcular la servidumbre administrativa del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

#### III.1.4. *Normas y criterios aplicables a los ocupantes del espacio público*

En los casos que el espacio público esté ocupado por particulares que ejercen allí alguna actividad, la situación jurídica de éstos frente a la necesaria liberación de este espacio para la ejecución de obras dependerá del título en virtud del cual detentan el uso de este espacio:

Uso común: se trata de los casos particulares a los que la ley local permite el ejercicio de la actividad sin necesidad de permiso o autorización por parte de la autoridad, caracterizándolo como un uso común. En este caso, no corresponderá a derecho ninguna indemnización por el desplazamiento de la actividad desarrollada en el espacio público a raíz de la ejecución de las obras en él, como así tampoco de los perjuicios resultantes para quienes la ejerzan.

Ocupación ilegítima: se configura cuando el uso del espacio público es ejercido sin la autorización requerida por parte de la autoridad competente. Al igual que en el caso anterior, no corresponderá indemnización alguna de acuerdo al marco legal expropiatorio, dado que estos ocupantes no poseen título del cual surja derecho alguno exclusivo que se vea afectado por el inicio de las obras.

Permiso precario: En este caso, el particular ha sido autorizado por la autoridad competente para ejercer en el espacio público su actividad conforme a la reglamentación local. Este permiso no otorga al permisionario ningún derecho frente al Estado y no constituye por sí un derecho adquirido dentro de su patrimonio. Tiene entonces carácter precario, en tanto es susceptible de revocación por la autoridad que lo otorgó, en cualquier momento y por razones de oportunidad, mérito y/o conveniencia, basadas en el interés público y en tanto no sea arbitraria e irrazonable. Esta revocación del permiso no acarreará indemnización alguna, dado que no existe un derecho patrimonial adquirido.

Concesión de uso: esta concesión es otorgada por la autoridad competente local a título de derecho de uso especial y exclusivo sobre el espacio público, el cual engendra para su titular un derecho público subjetivo oponible ante la autoridad y terceros y constituye un derecho adquirido dentro del patrimonio de aquél. Por ello, esta concesión no es revocable y su revocación deberá ser indemnizada conforme el Art. 17 de la CN.

Sin perjuicio de la variedad de casos en que corresponda o no, según su situación jurídica, una indemnización conforme a las normas expropiatorias, la asistencia para la relocalización y restablecimiento de los medios de subsistencia y condiciones socio-económicas se garantizarán en el marco de los Planes de Reasentamiento que se formulen.

## **IV. LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES DE REASENTAMIENTO**

### **IV.1. ARREGLOS INSTITUCIONALES Y RESPONSABILIDADES**

La formulación del Plan Acción para el Reasentamiento (PR) definitivo será responsabilidad de la provincia y/u organismo promotor de la intervención que le da origen, quien podrá realizarla en forma directa o a través de la contratación externa de especialistas o de convenios con instituciones públicas o universidades con experiencia en la materia.

Independientemente de las diferencias que puedan existir entre el marco normativo nacional y los distintos regímenes provinciales y las particularidades de la organización institucional propia de cada provincia, las provincias que en el marco del GIRSAR sean responsables de Subproyectos, deberán ejecutar las acciones necesarias para cumplir con lo establecido en el presente MPR, tal como se establece en la Carta de Adhesión al GIRSAR.

El Plan de Reasentamiento (PR) debe ser evaluado y aprobado por la EAS de la DIPROSE de acuerdo a los lineamientos y mecanismos institucionales generales establecidos para el GIRSAR.

Para la aprobación del PRI se evaluará: a) la voluntad y capacidad del proponente de aplicar el instrumento de reasentamiento; b) la viabilidad de las medidas propuestas para mejorar o restablecer los medios de subsistencia y las condiciones socio económicas de la población afectada; c) la disponibilidad de fondos suficientes para las actividades de reasentamiento; d) los riesgos importantes que existen, en particular el riesgo de empobrecimiento, debido a una aplicación inadecuada del instrumento de reasentamiento y e) la compatibilidad entre el instrumento de reasentamiento propuesto y el plan de ejecución del Subproyecto.

El PR preliminar, elaborado junto con la EIAS, será enviado al Banco para su evaluación. El PR definitivo se preparará un vez que el proyecto ejecutivo esté diseñado por la contratista y el mismo sea aceptable para el BM.

#### **IV.2. TIPOS DE PLAN DE REASENTAMIENTO, CONTENIDOS DE LOS PLANES DE REASENTAMIENTO Y CONFORMACION DE EQUIPO DE TRABAJO**

Un plan de reasentamiento o un plan de reasentamiento abreviado es necesario para todas las Operaciones que entrañen reasentamiento involuntario, a menos que se indique otra cosa (véanse el párrafo 25 y el Anexo A del PO 4.12 del BM).

El PR contará con un equipo definido y con los recursos humanos, físicos y financieros acordes con la magnitud y complejidad del reasentamiento en cuestión, a fin de cumplir oportunamente con el cronograma de preparación y ejecución del mismo, en forma coordinada con el cronograma de licitación, contratación y construcción de las obras estructurales.

La preparación del PR comprenderá una evaluación rápida de la magnitud y la complejidad del reasentamiento, identificando temas tales como el tipo y nivel de impacto que lo activa, si es individual o colectivo, entre otros aspectos que ayudarán a definir su alcance y evaluar la necesidad de recursos técnicos, físicos y financieros para desarrollarlo.

El tipo de PR dependerá de la cantidad de personas o unidades económicas. En caso que las personas desplazadas fueran menos de 200 podrá prepararse un Plan de Reasentamiento Abreviado, de acuerdo a lo establecido en la OP 4.12 del BM.

El alcance y el nivel de detalle de los PR estarán asociados a la magnitud de la afectación que se genere. El Plan de Reasentamiento comprenderá, como mínimo, los elementos siguientes:

- Descripción del Subproyecto y actividad que da lugar al reasentamiento e identificación del área del Subproyecto, indicando también área de impacto, la localización de los predios requeridos por el proyecto, descripción de los impactos que generarán reasentamiento y alternativas estudiadas para reducir al mínimo el reasentamiento.
- Objetivo del plan de reasentamiento.
- Definición del tipo de reasentamiento (individual o colectivo).
- Resultados de estudios socioeconómicos y de topografía de los predios (si fuera necesario), y de títulos.
- Censo detallado de las unidades sociales (personas, familias y unidades económicas) residentes o con derechos en los predios del área afectada, que definirá la fecha límite para el reconocimiento del derecho a recibir asistencia.
- Marco legal e institucional aplicable (incluyendo organismos y áreas responsables de la ejecución del plan).
- Categorías de afectados y criterios de elegibilidad a los fines de recibir compensaciones o cualquier otro tipo de asistencia.
- Descripción de impactos que sufrirá la población afectada (económicos, socioculturales, socio ambientales; etc.).
- Descripción de la compensación y otro tipo de asistencia para el reasentamiento que se ha de proporcionar.
- Proceso de consultas con las personas desplazadas sobre alternativas aceptables.
- Descripción de los procedimientos y mecanismos para la ejecución y los procedimientos para la compensación de los reclamos y quejas.

- Estructura organizacional, con recursos físicos y humanos con las responsabilidades institucionales de cada una de las entidades participantes. Esto incluye los instrumentos por los cuales cada organismo participante se hace responsable (acuerdos, contratos, etc.).
- Disposiciones sobre seguimiento y evaluación.
- Calendario y presupuesto detallado para todas las acciones a implementar y las fuentes de financiamiento.

#### IV.3. *CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y CATEGORÍAS DE AFECTACIÓN*

Los criterios de elegibilidad para ser beneficiario del PR, y de las diferentes alternativas de solución que éste ofrezca serán los siguientes:

- Residir o desarrollar una actividad económica en los predios afectados por el sub-proyecto.
- Estar registrado en el censo oficial efectuado en el estudio socioeconómico correspondiente.

La fecha de corte de los listados de beneficiarios del PR será la establecida para la realización del relevamiento para el Censo y Diagnóstico de los grupos afectados, la cual debe ser anunciada pública y previamente a la realización del mismo.

Las categorías conceptuales de afectación serán las siguientes:

- Categoría I - Con derechos legales oficialmente establecidos respecto de las tierras (incluso derechos consuetudinarios y tradicionales reconocidos en la legislación);
- Categoría II - Sin derechos legales oficialmente establecidos respecto de las tierras en el momento de iniciarse el censo, pero que reclaman algún derecho a esas tierras o activos, a condición de que su reclamo este reconocido en la legislación o se reconozca mediante un proceso indicado en el PR, y
- Categoría III - Carencia de un derecho legal o una pretensión reconocibles respecto de la tierra que ocupan.

Los casos de la Categoría I y II, recibirán compensación por las tierras que pierden, además de otro tipo de asistencia de acuerdo se establece en la sección Análisis y selección de alternativas de solución. Los casos de la Categoría III, recibirán asistencia en caso que se requiera su reasentamiento físico en lugar de compensación por las tierras que ocupan, y otro tipo de asistencia, según proceda para lograr los objetivos establecidos en el presente Marco de Reasentamiento Involuntario, si ocupan la zona abarcada por el proyecto con anterioridad a la fecha de corte límite establecida, aceptable para el Banco.

Las personas que se trasladen a la zona después de la fecha de corte no tendrán derecho a compensación ni a ningún otro tipo de asistencia para el reasentamiento.



#### IV.4. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Una vez identificados y clasificados los impactos por grupos de afectación, las alternativas que se propongan a los afectados se deben ajustar a la realidad de cada afectación.

El PR deberá contemplar un proceso de consulta que asegure la participación de las personas afectadas en las decisiones relativas al reasentamiento. Deberá asegurarse que:

- se le informe a las personas desplazadas acerca de sus opciones y derechos relacionados con el reasentamiento;
- se les consulte y se les dé a elegir entre distintas opciones técnicas y económicas viables de reasentamiento, y
- se les otorgue una indemnización rápida y efectiva equivalente al costo total de reposición por las pérdidas de activos atribuibles directamente al proyecto.

De requerirse traslado físico, deberán preverse medidas que garanticen que las personas desplazadas:

- a) Recibirán asistencia (como por ejemplo subsidios de traslado) durante el traslado, y
- b) Recibirán viviendas o sitios para vivienda o, según el caso, sitios agrícolas cuyo potencial productivo, ubicación y otros factores sean, como mínimo, equivalentes en conjunto a las características del sitio original.

En los casos que sea necesario se deberán establecer medidas que aseguren que a las personas desplazadas:

- a) Se les ofrecerá apoyo después del desplazamiento, durante el período de transición, basado en una estimación prudente del tiempo que probablemente necesiten para restablecer sus medios de subsistencia y sus condiciones socio económicas, y
- b) Se les proporcionará, además de las medidas de compensación ya descritas, asistencia para el desarrollo, tal como preparación de la tierra, facilidades de crédito, capacitación u oportunidades de empleo.

Deberá darse preferencia a las estrategias de reasentamiento que contemplen la entrega de tierras a las personas desplazadas cuyos medios de subsistencia dependan de la tierra.

En los casos en que se presente ocupación del espacio público, ya sea con o sin permiso de la autoridad competente, se deberán planificar y realizar acciones con el objetivo de lograr la reubicación de tales actividades.

Si el desplazamiento está acompañado por la pérdida en el acceso a los servicios de salud, educación y transporte de la población relocalizada, se diseñarán las acciones imprescindibles para garantizar un acceso equivalente en el nuevo lugar de residencia.

En los casos en que se hayan identificado personas o grupos que por sus condiciones sociales, culturales, económicas o psicológicas resulten más vulnerables que otros a los impactos generados por el desplazamiento, se les brindará una atención especial para restablecer su condición socioeconómica.

En el caso de comunidades indígenas deberá asegurarse que: a) se hayan estudiado otros posibles diseños que permitan evitar el desplazamiento físico, y b) se haya obtenido amplio apoyo al mismo por parte de las comunidades indígenas afectadas, en el contexto del proceso de consulta previa, libre e informada.

En estos casos se desarrollará un Plan de Reasentamiento de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente MPR y el Anexo 4 del MGAS del GIRSAR (Marco de Planificación para Pueblos Indígenas).

#### **IV.5. ARTICULACIÓN DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO CON LAS ETAPAS TÉCNICAS DEL SUBPROYECTO.**

En todos los Subproyectos que generen desplazamiento de población en los términos definidos en este Marco, existirá una estrecha relación entre las etapas técnicas de las obras asociadas y la formulación y ejecución del PR. Esto garantizará la disponibilidad de predios, así como la resolución de las afectaciones que no implican adquisición de inmuebles, en el momento de iniciar la construcción de las obras y dará el tiempo necesario para la ejecución del PR. A continuación, se describe la relación entre las etapas constructivas y las actividades del Plan:

- Durante el diseño del Subproyecto se identificarán los impactos potenciales, con el fin de determinar la factibilidad social de la obra y los principales problemas a enfrentar, estimar los predios afectados, la población a desplazar, los costos de las compensaciones del PR, los terrenos, infraestructura básica y el equipamiento necesario;
- Con los Proyectos de las obras, se procederá a efectuar los diagnósticos técnicos, legales y socioeconómicos de los predios afectados y de la población por desplazar;
- Con base en estos diagnósticos, se identificarán los impactos, cantidad de unidades sociales a reasentar y conformará un equipo técnico que formulará el PRI preliminar, con su cronograma coordinado con los de las obras que generan el reasentamiento;
- Cada Subproyecto que genere reasentamiento deberá preparar un PR preliminar con base en los lineamientos del presente Marco. El PR preliminar deberá ser enviado al Banco para su evaluación, como parte de la EIAS que acompaña al documento principal del Subproyecto.
- Una vez determinados los criterios de elegibilidad y las alternativas de compensación, se socializará el PR y se consultará su contenido con los afectados<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Como parte del proceso de socialización, se debe asegurar que la población afectada recibirá información clara, veraz y oportuna sobre sus derechos, deberes y el estado en que se encuentra el proceso de adquisición de los bienes y las medidas previstas en el PR. Las unidades sociales que se deban trasladar serán consultadas sobre las alternativas de solución. Se deberá poner especial atención para fomentar la participación de los grupos más vulnerables a fin de asegurar que sus puntos de vista sean tenidos en cuenta como parte de este proceso. Durante la preparación del Plan, las personas afectadas deberán ser informadas acerca de los próximos pasos y fechas de traslados, con antelación suficiente, previo a que se lleven a cabo dichas acciones. Asimismo, las personas afectadas serán informadas sobre el

- Con el proyecto ejecutivo y la traza definitiva de la obra, y en base al proceso de socialización y consulta, la provincia elabora el PR definitivo incluyendo un resumen de los resultados de los procesos de socialización y consulta.
- Los PR deberán haber sido implementados de tal manera que los predios estén disponibles en el momento de iniciación de las obras en esos terrenos<sup>5</sup>.

## V. EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE REASENTAMIENTO

La ejecución del PR lo realizará la entidad responsable del sub-proyecto, o se podrá llevar a cabo mediante convenios de colaboración con otras instituciones.

Se contratará un Gestor Social del Territorio que se ocupará de la ejecución del PR con el apoyo de la entidad responsable de la ejecución del sub-proyecto. Este evaluará los progresos, identificará problemas y acordará soluciones.

### V.1. FINANCIAMIENTO DE LOS PLANES DE REASENTAMIENTO

El costo total del PR será parte del costo total del sub-proyecto que lo genere. Se incluirán en el presupuesto los valores de los predios que se necesita adquirir, los honorarios profesionales y las contrataciones de consultorías requeridas, el financiamiento de las acciones de compensación social y restablecimiento de las condiciones socioeconómicas previas a la ejecución de la obra, los gastos de administración y funcionamiento y las restantes actividades que conforman el PR.

### V.2. CONSULTAS Y RECLAMOS

La formulación del PRI detallará los mecanismos previstos en la normativa local y/o nacional y los que se diseñen específicamente en el marco del Subproyecto para la atención de quejas y reclamos y la resolución de conflictos.

El registro y gestión de las potenciales consultas y reclamos surgidos durante la ejecución del PRI deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el Mecanismo de Registro y Gestión de Consultas y Reclamos previsto en el MGAS del GIRSAR.

En el marco de dicho mecanismo, para el caso del PR la UEP llevará un registro específico con el objeto de que todos los reclamos en relación a las tasaciones de predios y bienes físicos y sobre la inclusión como beneficiarios en los programas del Plan sean atendidos y respondidos oportunamente.

---

proceso de asistencia durante el traslado (como parte de este proceso, la DIPROSE definirá si es necesario que la asistencia durante el traslado incluya algún tipo de compensación económica para afrontar dicho traslado).

<sup>5</sup> De acuerdo a lo establecido en la OP 4.12, la privación de tierras y otros activos conexos sólo podrá ocurrir una vez que se haya pagado la indemnización y, cuando corresponda, una vez que se hayan proporcionado los sitios de reasentamiento y subsidios de traslado a las personas desplazadas.

A los fines de resolver los conflictos que pudieran generarse en la implementación del PRI, y una vez agotadas las vías administrativas, se promoverá la adopción voluntaria de procedimientos alternativos de solución de los mismos, en forma previa a la resolución por vía judicial.

En relación con este MPR en particular, además de los canales de que dispone el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en general, la DIPROSE pone a disposición los siguientes medios para la recepción de inquietudes y reclamos:

- Teléfono: 54 (011) 4349-1300
- Micro-sitio del GIRSAR: <https://www.argentina.gob.ar/agroindustria/girsar>
- Casilla de correo específica del Mecanismo: [consultasgirsar@magyp.gob.ar](mailto:consultasgirsar@magyp.gob.ar)
- Personalmente o por correo postal: Av. Belgrano 456 (C1092AAR) CABA

### **V.3. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PLANES DE REASENTAMIENTO**

En el marco de los Subproyectos el Gestor Social del Territorio será el responsable del seguimiento y ejecución de las siguientes medidas de monitoreo:

- Efectuar un seguimiento mensual de la implementación del Plan de Reasentamiento, haciendo los ajustes necesarios del plan y del cronograma que permitan mantener los objetivos generales.
- Monitorear la implementación de los programas de apoyo según lo previsto en cada uno de ellos.
- Evaluar a los seis y doce meses la situación en relación con el mejoramiento o restitución de las condiciones socio-económicas de la población afectada, establecer un plazo de seguimiento hasta que su bienestar se estabilice, y monitorear el restablecimiento de los ingresos y reposición de los bienes perdidos.
- Presentar trimestralmente a la UGAS un informe sobre el cumplimiento de lo exigido en el PR.

## **VI. CONSULTA DEL MPR**

El MPR se publicó, junto con el MGAS, el 18 de diciembre de 2017 en la página web de la UCAR, actual DIPROSE ([www.ucar.gob.ar](http://www.ucar.gob.ar)) y se envió una convocatoria amplia difundiendo dicha publicación para que organismos del Estado y actores y personas interesadas tengan oportunidad de compartir su retroalimentación sobre dichos documentos hasta el 15 de enero de 2018.

Dado que durante la etapa general de consulta no se habían recibido comentarios de productores, el 18 de enero de 2018 se realizó una segunda instancia de consulta del MPR con contactos específicos dirigidos a organizaciones de productores para que pudieran compartir su retroalimentación hasta el 25 de enero de 2018. Teniendo en cuenta que las provincias de Buenos Aires y Mendoza son las que se encuentran más avanzadas en la preparación de sus planes de gestión integral de riesgo, se buscó contactar a organizaciones de productores de ambas provincias para obtener comentarios de sectores que podrían encontrarse eventualmente entre las personas afectadas por el Proyecto y contempladas en el MPR.

Se contactó telefónicamente y/o por mail a las siguientes organizaciones:

- Cluster Porcino Daireaux-Henderson, Provincia de Buenos Aires. Sofía Niven, Coordinadora.

- Cluster Ganadero, Provincia de Mendoza. Mauricio López, Coordinador.
- Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores, de Ajos, Cebollas y Afines de la Provincia de Mendoza. Hugo San Martín, Gerente.
- Sociedad Rural Coronel Brandsen, Provincia de Buenos Aires. Hugo Carricaburu, Presidente.
- Sociedad Rural General Paz, Provincia de Buenos Aires. Pablo Edwards, Presidente.

En el Apéndice VI se incluyen copias de las cartas de difusión y mails de seguimiento remitidos en el marco del proceso de consulta.

Como parte del proceso de consulta, además de los canales de que dispone el Ministerio de Agroindustria (actual MAGyP) en general, la entonces UCAR puso a disposición los siguientes medios para la recepción de inquietudes, consultas y sugerencias:

- Teléfono: (011) 4349-1300
- Mail: fhernandez@ucar.gov.ar
- Web: <http://www.ucar.gob.ar/index.php/contacto>
- Personalmente en: Av. Belgrano 456, C1092AAR, CABA

Finalizada esta etapa de consulta, se recibieron tres respuestas. En el Apéndice VII, se incluyen copias de las respuestas correspondientes.

El Cluster Ganadero de Mendoza manifestó que en principio no encontraron ninguna objeción al MPR y agregó que enviaría el MPR a otras instituciones de productores que integran el Cluster ganadero.

Desde el Cluster Porcino de Daireaux-Henderson manifestaron que pudieron acceder al MPR a través del link enviado por mail y que lo estaban analizando. La representante del Cluster, Sofía Niven, se comunicó telefónicamente y pidió aclaraciones sobre el Programa GIRSAR para entender mejor en qué contexto se aplicaría el MPR. Se les brindaron las explicaciones correspondientes y manifestó que en principio no tendría objeciones al MPR pero que lo revisaría nuevamente a la luz de la nueva información brindada. Además, se le indicó cómo acceder al MGAS, publicado en la página de la entonces UCAR.

La Sociedad Rural de Coronel Brandsen acusó recibo del de la información enviada para la consulta del MPR y se comunicó telefónicamente, a través de su Presidente, Hugo Carricaburu. Requirieron más información sobre el Programa GIRSAR y consultaron sobre los tipos de Subproyectos que podrían formar parte del mismo. En este sentido, se le brindó mayor información y se explicó cómo acceder al MGAS publicado en la misma página que el MPR. No realizó objeciones al MPR.

## **VII. APÉNDICES**

**Apéndice I.** Tratados internacionales sobre derechos humanos incorporados a la constitución nacional

**Apéndice II.** Marco Jurídico y Particularidades del Procedimiento Expropiatorio Nacional

**Apéndice III.** Metodología Nacional para calcular la valuación de la servidumbre administrativa

**Apéndice IV.** Capacidad de la UCAR para la identificación monitoreo y evaluación de procesos de reasentamiento.

**Apéndice V.** Análisis de la OP 4.12 y la normativa nacional.

**Apéndice VI.** Notas de difusión y correos electrónicos de la consulta del MPR remitidas a organizaciones de productores.

**Apéndice VII.** Respuestas a la consulta del MPR.

**Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR) - Programa P162316 - Marco de Gestión Ambiental y Social**

**Anexo 8 - Marco de Política de Reasentamiento**

**APÉNDICE I. TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS  
INCORPORADOS A LA CONSTITUCION NACIONAL**

---

La Constitución Argentina otorga a través del art. 75, inciso 22, rango constitucional a los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado. La jerarquía constitucional de los tratados constitucionales implica, necesariamente, condicionar el ejercicio de todo el poder público incluido el que ejerce el Poder Ejecutivo, al pleno respeto y garantía de estos instrumentos. La violación de los tratados de derechos humanos, dada la jerarquía constitucional que se les reconoce, configura una violación de la constitución. Es por esto que, las distintas áreas del Gobierno deben velar por el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina en Materia de Derechos humanos, a través de las acciones específicas para las que cada organismo está facultado.

***Convención Americana sobre derechos humanos – “Pacto de San José de Costa Rica”***

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en el artículo 21 correspondiente a la propiedad privada:

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública

***Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre***

Derecho a la preservación de la Salud y el Bienestar

Artículo XI: Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

Derecho a la propiedad

Artículo XXIII: Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y el hogar.

## ***Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas***

Artículo 17:

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad

Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 25: Toda persona tiene de derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

## ***Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales.***

Artículo 11: 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.



## **Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR) - Programa P162316 - Marco de Gestión Ambiental y Social**

### **Anexo 8 - Marco de Política de Reasentamiento**

#### **APÉNDICE II. MARCO JURÍDICO Y PARTICULARIDADES DEL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO NACIONAL**

---

Como se ha mencionado, la Constitución de la Nación Argentina consagra el principio de la inviolabilidad de la propiedad y establece que ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. El régimen nacional de expropiaciones está establecido por la Ley 21.499, y se completa por las normas que emite el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN).

Cabe destacar que en el marco del GIRSAR son las Provincias las que cuentan con la facultad de expropiar los bienes que fuesen necesarios para ejecutar los Subproyectos. Por ello, será de aplicación la normativa provincial que exista sobre la materia, y el procedimiento expropiatorio allí establecido. La normativa nacional es de carácter supletorio.

##### **i. Objeto expropiable: alcance**

Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la “utilidad pública”, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o privado, sean cosas o no.

##### **ii. Determinación del objeto a expropiar**

La expropiación siempre se aplica sobre un bien determinado. Se debe distinguir entre determinación e individualización del bien. La determinación debe estar siempre en la ley, mientras que la individualización del inmueble afectado podrá quedar en manos de la Administración.

Cuando la expropiación de un inmueble incida sobre otros con los que constituye una unidad orgánica, el o los propietarios de estos últimos estarán habilitados para accionar por expropiación irregular si se afectare su estructura arquitectónica, su aptitud funcional o de algún modo resultare lesionado el derecho de propiedad.

La indemnización sólo comprenderá el *valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación*. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra por ejecutarse. No se pagará lucro cesante.

No se indemnizarán las mejoras realizadas en el bien con posterioridad al acto que lo declaró sujeto a expropiación, salvo las mejoras necesarias.

La indemnización se pagará en dinero en efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor.

### iii. Derechos de los expropiados

Declarada la utilidad pública por ley, pueden presentarse tres situaciones perjudiciales a los intereses y la propiedad de los expropiados ante lo cual cuentan con acciones establecidas en la legislación de expropiación.

En la denominada *expropiación inversa o irregular*, es el propietario del inmueble involucrado quien cuenta con el derecho de promover la acción de expropiación contra el expropiante.

Procede la acción de expropiación irregular en los siguientes casos:

Cuando existiendo una ley que declara de utilidad pública un bien, el Estado toma la posesión del mismo sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnización;

Cuando, con motivo de la ley de declaración de utilidad pública, de hecho una cosa mueble o inmueble resulte indisponible por evidente dificultad o impedimento para disponer de ella en condiciones normales;

Cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación, en razón de la obra de que se trate, que importe una lesión a su derecho de propiedad. (Porque sólo puede haber expropiación inversa o indirecta cuando la causa de la limitación del derecho del particular es el interés público)

Ante esta situación, el propio propietario del inmueble involucrado promoverá acción solicitando la efectiva transmisión del dominio al Estado Nacional previa efectivización del pago de la indemnización. En el juicio de expropiación irregular los valores indemnizables serán fijados en la misma forma prevista para el juicio de expropiación regular, contemplada en el Art. 10 de la ley y siguientes, debiendo tenerse en cuenta para la tasación que no existe, en su caso, toma de posesión.

Ante la *expropiación parcial* de un inmueble cuyo sobrante sin expropiar fuere inadecuado para su uso o explotación racional, podrá exigirse la expropiación total del inmueble mediante la acción de expropiación inversa. (Art 8º, Ley 21499).

El Código Civil Argentino establece en el artículo 228 que: “Las cosas no pueden ser divididas si su fraccionamiento convierte en antieconómico su uso y aprovechamiento. En materia de inmuebles, la reglamentación del fraccionamiento parcelario corresponde a las autoridades locales.” Por lo cual, la división de parcelas agropecuarias no debe resultar una superficie inaprovechable económicamente según su destino. De acuerdo con el artículo 8º de la ley 21499, “tratándose de inmuebles rurales, en cada caso serán determinadas las superficies inadecuadas teniendo en cuenta la explotación efectuada por el expropiado”. Este artículo establece también que “en el supuesto del avenimiento, las partes de común acuerdo determinarán la superficie inadecuada, a efectos de incluirla en la transferencia del dominio; en el juicio de expropiación dicha superficie

será establecida por el juez.

Cuando el remanente de la superficie expropiada del inmueble no alcance dicha unidad económica, podrá acordarse en el convenio de avenimiento, la expropiación de la totalidad del inmueble, por encuadrarse dentro del instituto de la expropiación inversa.

Por otra parte, la *retrocesión* es la acción judicial que tiene el expropiado para obtener el reintegro del bien expropiado, una vez perfeccionada la expropiación (por haberse realizado el pago de la indemnización y la transferencia de la propiedad al expropiante mediante sentencia firme), cuando dentro del plazo de ley no se ha hecho efectivo el destino para el que fue expropiado el bien de que se trate, o se le ha dado otro distinto sin conexidad, interdependencia o correlación con aquél, en el lapso de dos años contado desde el perfeccionamiento de la expropiación. El accionante debe reintegrar lo que haya percibido en concepto de indemnización según la suma y plazo que establezca la sentencia que hiciere lugar a su pretensión.

Tendrá derecho entonces, a la devolución del bien expropiado libre de todo ocupante, cargas, gravámenes y servidumbres que hubieren sido constituidas después de la toma de posesión por parte del expropiante.

#### iv. Consideraciones sobre posibles reclamos de propietarios afectados

Debe diferenciarse el caso de aquellos sujetos cuyos bienes sean expropiados, de los que se vean perjudicados por la alteración de cualquier condición a consecuencia del proyecto.

Como se señaló más arriba, la privación de la propiedad particular de aquellos titulares de bienes alcanzados por la declaración de utilidad pública tiene como presupuesto una indemnización. Esta cubre el valor objetivo del bien y los daños directos e inmediatos que resulten de la expropiación, sin derecho a otro tipo de recomposición por valor afectivo o las ganancias frustradas o pérdidas en consecuencia.<sup>3</sup>

Un proyecto puede producir la alteración de una determinada condición de explotación de actividades, entre ellas las comerciales, generando condiciones menos favorables para la explotación comercial a consecuencia de la nueva situación. La variación y desmejoría de las condiciones existentes y la desvalorización de propiedades, ya descrita, en tanto no se trata del desmembramiento de la propiedad o de la sujeción a una servidumbre, son meras modificaciones de la situación preexistente, en sí mismas, no indemnizables de acuerdo a la normativa sobre expropiación.

Las compensaciones que se decida efectuar en el caso de que el proyecto afecte lucrativamente alguna actividad, no tendrán carácter de indemnización por la pérdida de ganancias que la nueva situación causa. Sin perjuicio de ello, la DIPROSE y los demás organismos involucrados en las obras y actividades implementarán las medidas de compensación requeridas de acuerdo con los lineamientos de la OP 4.12 del BM.

#### v. Procedimiento expropiatorio (de acuerdo a la normativa citada)

A continuación se detalla el procedimiento expropiatorio que surge de la normativa nacional vigente antes descripta.

(i) Proyecto de obra: La documentación técnica del Subproyecto deberá justificar la necesidad de la expropiación y definir los alcances del proyecto otorgando los fundamentos para el Decreto del P.E. que ordene la expropiación.

(ii) Identificar cada propiedad a afectar.

(iii) Determinar si se trata de afectación total o parcial.

- a. Identificar al propietario mediante el informe del Registro de la Propiedad.
- b. Si la afectación es parcial, hacer el plano de mensura de la afectación parcial y se inscribe en el Catastro.

(iv) Obtener el dictamen inicial del Tribunal de Tasación de la Nación (TT) para todos los casos (afectación total o parcial).

(v) Intentar gestión de avenimiento de acuerdo con el art 13 la Ley de Expropiaciones se ofrece la tasación del TT más un 10 % ). Esto queda establecido en el artículo 10 ° de la ley 21499.

Ley 21499 Art. 13 "...Tratándose de inmuebles el valor máximo estimado será incrementado automáticamente y por todo concepto en un diez por ciento."

#### **Si hay acuerdo:**

- Se firma convenio ad referendum del Poder Ejecutivo o por representante del Poder Ejecutivo con facultades suficientes a ese fin.
- Se tramita:
  1. Si fuere el caso el otorgamiento del referendo.
  2. El pago de la indemnización pactada.
  3. Se dispone la inscripción del convenio con la resolución en el Registro de la Propiedad (no hay escritura pública)
  4. Se toma posesión
  5. Se paga
  6. Se inscribe

#### **Si no hay acuerdo, el caso va a juicio. Recaudos previos:**

(i) Dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

(ii) Boleta de depósito a la orden del juez por el monto de la tasación

(iii) Informe del Registro de la Propiedad identificando al titular del dominio

(iv) 1º Demanda de expropiación pidiendo:

- se otorgue posesión judicial del inmueble
- se declare expropiado
- se determine el monto de la indemnización expropiatoria de acuerdo con el dictamen inicial

2° Mandamiento judicial de posesión (excepto que la Administración ya disponga de la posesión por habérsela dado voluntariamente el propietario).

3° Traslado de la Demanda: Con la contestación queda trabada la Litis cuyo objeto se centra en el monto indemnizatorio.

4° Prueba: Típicamente está integrada por Dictamen del Tribunal de Tasación con los peritos de parte.

5° Sentencia de expropiación: se declara expropiado y fija la indemnización de acuerdo al segundo dictamen del tribunal con más sus intereses desde la fecha de toma de posesión. En general con las costas a cargo del expropiante.

6° Eventualmente trámite de apelación y sentencia de la Cámara de apelaciones.

7° Depósito de la diferencia restante.

8° Inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Cuando en las tratativas para llegar a un avenimiento el propietario rechaza el precio ofrecido, a veces el propietario da un permiso de ocupación o posesión. Dado que raramente un afectado cuestiona el derecho de la Administración a expropiar el bien de que se trate, el juicio de expropiación en definitiva queda limitado a tres objetivos, en lo inmediato obtener la posesión para la Administración a fin de poder aplicar el bien expropiado al objetivo para el cual sea expropiado, obtenida la posesión el objetivo del juicio de expropiación queda limitado a la determinación de la indemnización justa, su pago y la inscripción del dominio respectiva.

#### vi. Procedimiento para determinar la forma de pago y la indemnización

Conforme la ley 21.499, el régimen nacional tiene las siguientes características y límites:

- La indemnización se paga en dinero en efectivo, previamente a la transmisión de la propiedad.
- Comprende el valor objetivo del bien y los daños directos. En caso de avenimiento, debe preverse en el contrato de avenimiento qué daños incluye la indemnización.
- No comprende las ganancias hipotéticas que se dejen de percibir, el valor afectivo ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra por ejecutarse. No se paga lucro cesante ni ganancias hipotéticas.
- El valor se computa según el momento en que el expropiante entra en posesión del bien (previa consignación del importe establecido por el Tribunal de Tasaciones).
- No se actualiza el valor del bien.

- Se actualiza el valor de la moneda (indexación) desde el tiempo del cómputo hasta el efectivo pago de la indemnización.

Se entiende por Valor Objetivo del bien, “(...) la suma dineraria que le permita al expropiado resarcirse del valor del bien afectado y los daños que sean consecuencia directa de la expropiación, en condiciones equivalentes a las que precedían a la expropiación, sin tener en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir la obra a ejecutarse. En consecuencia, el Valor Objetivo podrá corresponderse con el valor de mercado cuando éste pueda determinarse, o con el costo de reposición depreciado (CRD) en su defecto (...)”.

Los titulares de parcelas involucradas y mensuradas que sean objeto de expropiación, deben ser indemnizados hasta el monto del valor objetivo de sus propiedades (calculado en base al valor de mercado y la productividad de la tierra) y por los perjuicios directos que la expropiación y/o su trámite les ocasione. Entre otros derechos, pueden demandar la expropiación total de sus propiedades cuando la expropiación parcial inutilice las propiedades no sujetas a expropiación según resulte de las mensuras practicadas.

Los procedimientos y pautas de avalúos están sujetos a las disposiciones de las siguientes normas en el régimen nacional: normas TTN 7.1, TTN 3.1 y TTN 4.1.

En el Apéndice III se presenta, a modo de ejemplo, un detalle de la metodología surgida de la normativa nacional.

#### vii. Procedimiento de avalúo de bienes a expropiar

Los criterios de valuación para expropiaciones por causa de utilidad pública, presentan algunas diferencias de acuerdo al marco jurídico nacional e institucional frente a la Política Operacional 4.12 del Banco Mundial aplicables. No obstante la existencia de estas diferencias, el concepto subyacente en ambos regímenes converge en la noción de la reparación integral del perjuicio ocasionado por la afectación al derecho de propiedad. Esto se puede resumir en que el afectado por una obra pública, no sufrirá un menoscabo patrimonial, pudiendo en todos los casos acceder a una reparación integral que le permita, por ejemplo, reponer el bien del cuál ha sido desapoderado por otro de similares características y condiciones.

#### **Norma TTN 7.1**

La Ley Nacional establece en su artículo 10, el concepto de “valor objetivo” del bien a expropiar y los daños directos que el acto expropiatorio trae aparejado. No se contemplan las circunstancias afectivas o personales, ni tampoco las ganancias hipotéticas que pudiera obtener el propietario, ni los eventuales incrementos en valor que pudieran producirse por la ejecución de la obra. El Tribunal de Tasaciones ha establecido que el concepto de valor objetivo podrá corresponderse con el valor de mercado “(...) cuando éste puede determinarse por el costo de reposición (...)” (Norma Tribunal de Tasaciones de la Nación TTN 7.1) Se sigue por lo tanto el Principio de Sustitución donde el valor del bien equivale al valor de otros activos de similares características del bien a expropiar.

Las políticas del Banco Mundial (OP 4.12) determinan esquemas de valoración de activos en base al “costo de reposición” como una cantidad de dinero suficiente para reponer los activos perdidos y los costos de transacción, previéndose la asistencia adicional en el caso de no contemplarse en la legislación local esta definición.

Como se puede apreciar, los matices en las diferentes definiciones tienden a converger en el concepto de mantener el valor de la propiedad, permitiendo que el afectado pueda sustituir o reponer el bien a expropiar con la indemnización acordada.

**Tabla 3. Comparación tasación nacional y OP 4.12**

Marco jurídico nacional	Política Operacional OP 4.12
Valor objetivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• valor de mercado</li> <li>• costo de reposición</li> </ul>	Costo de reposición

En todos los casos, los regímenes jurídicos y políticas de las instituciones multilaterales de financiamiento procuran una indemnización al afectado por una obra pública que refleje las pérdidas sufridas, de acuerdo a las condiciones de mercado, dejando fuera de este rubro aquellas cuestiones que carecen de asidero objetivo, como pueden ser las especulaciones inmobiliarias o eventuales “plusvalías” dadas por contextos circunstanciales.

Por otro lado, es dable destacar que los antecedentes administrativos en la República Argentina reflejan en términos generales un bajo índice de litigios, precisamente en base a que los criterios de valuación han seguido siempre el valor del mercado, y en el caso del régimen nacional, con un adicional del 10% destinado a mitigar el impacto de los costos de transacción y la afectación particular que representa una hipótesis de expropiación.

#### viii. Mecanismos de valuación y los sistemas de control externos.

El régimen de expropiaciones está consolidado, tanto desde el punto de vista normativo como operativo. En lo normativo, la ley de expropiaciones 21.449 del año 1977 perfeccionó y amplió la aplicación del sistema de tasaciones ya instituido por la ley de expropiaciones N° 13624 del año 1948. El Tribunal Nacional de Tasaciones es un tribunal administrativo de carácter técnico que ha desarrollado y aplica técnicas objetivas de valuación de los bienes a expropiar, basándose en datos de operaciones reales debidamente ponderados para una adecuada homogenización entre los valores de referencia y el valor del bien a tasar. Sus dictámenes son la base de los acuerdos de avenimiento extrajudicial, así como de las sentencias judiciales de expropiación. La consolidada identidad técnica del Tribunal Nacional de Tasaciones ha sido la base de una muy reducida litigiosidad en torno al valor de los bienes expropiados

El marco normativo citado establece los procedimientos para el avenimiento (extrajudicial) y el juicio expropiatorio, en caso de no arribar a acuerdo. Sin perjuicio de las garantías establecidas a favor del particular afectado por una expropiación a través del sistema judicial, el derecho argentino establece mecanismos de contralor y fiscalización a través de organismos públicos de defensa de los derechos colectivos y los intereses difusos, como así también las garantías de los

individuos.

Estos organismos tienen además el objetivo de velar por los intereses de la buena administración y gestión pública. A nivel nacional, el Defensor del Pueblo reviste carácter constitucional.



**Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR) - Programa P162316 - Marco de Gestión Ambiental y Social**

**Anexo 8 - Marco de Política de Reasentamiento**

***APÉNDICE III. METODOLOGIA NACIONAL PARA CALCULAR LA VALUACION DE LA SERVIDUMBRE ADMINISTRATIVA***

---

Las Provincias cuentan con la facultad de expropiar los bienes que fuesen necesarios para ejecutar los Subproyectos. Por ello, será de aplicación la normativa provincial que exista sobre la materia, y el procedimiento de valuación de servidumbre administrativa allí establecido. La normativa nacional es de carácter supletorio.

Las normas nacionales de tasación establecen los aspectos, métodos y formas de valoración de las tasaciones conforme a la restricción y el bien de que se trate. Para el caso, el Tribunal de Tasaciones de la Nación establece la aplicación de las siguientes normas:

Método de Tasación: Norma TTN1.3 conforme a la Ley Nacional Nº 21.626 (Ley Orgánica del Tribunal de Tasaciones de la Nación).

El propietario del fundo afectado tiene derecho a una indemnización, que se determina teniendo en cuenta:

El valor del uso del terreno ocupado por la servidumbre.

Daños que cause la imposición de la servidumbre.

Desvalorización que sufre el sirviente por la subdivisión.

El valor del uso del terreno afectado por la servidumbre se puede determinar a partir del valor de mercado, basado en el principio de sustitución (Norma TTN1.3). Su aplicación requiere:

- Establecer las cualidades y características propias del bien a tasar que influyen en su valor.
- Analizar el segmento del mercado inmobiliario relativo a los bienes comparables al que se valora y, basándose en informaciones concretas sobre transacciones reales u ofertas, obtener valores al contado de dichos bienes en la fecha de la tasación.
- Seleccionar de la información obtenida una muestra representativa de bienes comparables al que se valora, descartando aquellos que se desvíen por precios anormales o circunstancias especiales y homogeneizar los precios unitarios de los elementos de la muestra con el del bien objeto de tasación.

Atendiendo a la fecha de los datos seleccionados y a las diferencias o analogías observadas entre las características: superficie, tipología y antigüedad de la edificación, entorno, o cualesquiera otras relevantes, de aquellos bienes y las del bien a tasar.

- Asignar el valor del inmueble en función del valor unitario obtenido utilizando planillas aprobadas.

La utilización de este método exigirá como requisitos indispensables:

- La existencia de un mercado representativo de bienes comparables.
- Disponer de datos suficientemente representativos de ofertas y/o ventas.

Determinado el valor de mercado de la tierra, debe entenderse libre de mejoras del inmueble, afectado por coeficientes de restricción aplicables a cada caso que se presenten sobre la franja de la servidumbre.

A los efectos de medir el grado de limitaciones impuestas por una servidumbre, y en concordancia con la normativa vigente, resulta razonable establecer una escala de valores en base a la aptitud, destino o uso del suelo por el que atraviesa la franja de servidumbre. Asimismo, la magnitud del perjuicio estará determinada por la relación entre la superficie afectada sobre la superficie total de la parcela y la forma en que el trazado incide en la geometría del inmueble y se determinará en cada caso.

A esos efectos se debe aplicar al valor de la tierra, los coeficientes de restricción que se establecen en el cuadro que se presenta más abajo, que atienden a la aptitud o uso de la franja de servidumbre.

En ningún caso se abonará indemnización por lucro cesante, valor afectivo, valor histórico ni panorámico.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación, no establece una norma específica aplicable a las servidumbres de paso y acueducto, sino que prevé para el caso de las servidumbres de electroducto.

Debido a los múltiples casos que se pueden presentar, el valuador debe ser cuidadoso para aplicar el factor que afecta la servidumbre así como al valorar la finca por el tipo de servidumbre y el riesgo que puede creársele a la misma y por ende en parte a la zona.

Para ello, en general, se ha partido de establecer tres categorías, dependiendo del grado de afectación al inmueble y son:

*a) Categoría Baja:*

Las servidumbres que se han clasificado en esta categoría, son las que no se observan a simple vista y no presentan un riesgo destructivo (líneas telefónicas y eléctricas). Pueden utilizarse para cierto tipo de cultivos y ganadería. Se permite la construcción de obras civiles livianas sobre ellas (pisos de concreto).

Atraviesan zonas boscosas y montañosas (aéreas) sin causar alteración al medio. Así como pueden ser caminos de accesos, donde la afectación al inmueble es nula. Es decir, pueden ser servidumbres subterráneas, sobre el terreno y aéreas.

*b) Categoría Media:*

Se clasifican aquellas líneas aéreas que deterioran el paisaje y que afectan zonas de fumigación.

Sobre nivel que afectan cultivos y ganadería en mediana escala.

Subterráneo donde las tuberías no son de diámetro considerable y el líquido que transportan no es de alto riesgo para la contaminación de la zona, en caso de rompimiento de las mismas.

*c) Categoría Alta:*

Se consideran las que pasan por zonas urbanas, lo que obliga a que predios con alto grado de deseabilidad para el desarrollo de proyectos civiles, tengan que ser modificados. Casos de líneas de alta tensión, tuberías para oleoductos tanto sobre el terreno como subterráneas con el riesgo de explosiones e incendios.

Canales de riego, donde los pasos limitan el libre tránsito peatonal y vehicular en la finca así como el de animales.

Cortes de terrenos para pasar tuberías o construir caminos, con el riesgo de derrumbes o deslizamientos.

**Tabla 4. Categorías de Afectación**

<b>Categorías de Afectación</b>	<b>Porcentaje de Afectación</b>
Categoría Baja	30%-40%
Categoría Media	45%-70%
Categoría Alta	75%-100%

En síntesis: El Valor de Tasación para estos fines será el valor de mercado, afectado por los coeficientes de restricción según el caso.

Para ello se deberá:

- Determinar el valor de la tierra afectada por el trazado del acueducto considerando las áreas de afectación según corresponda. La determinación del valor se realizará por el Método Comparativo aprobado por las Normas TTN 3.x y aplicar al valor de la tierra así determinado los coeficientes de restricción que se establecen en el cuadro ut supra detallado que atienden a la aptitud o uso de la franja de servidumbre.

- Determinar en cada caso particular la magnitud del perjuicio al predio remanente debida a la relación entre la superficie afectada y la superficie total del predio y/o la forma o disposición del trazado de la servidumbre en fracciones rurales.

**Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR) - Programación P162316 - Marco de Gestión Ambiental y Social**

**Anexo 8 - Marco de Política de Reasentamiento**

***APÉNDICE IV. CAPACIDAD DE LA DIPROSE PARA LA IDENTIFICACIÓN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE REASENTAMIENTO***

---

Para poder llevar adelante la identificación, el monitoreo y la evaluación de procesos de reasentamiento bajo el Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR), la DIPROSE cuenta con un equipo de profesionales con experiencia y capacidades específicas en la materia.

El equipo está conformado por especialistas en reasentamiento y aspectos legales de la Dirección Gestión y Monitoreo de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales. Tienen experiencia de varios años gestionando Subproyectos de similares características a los que se diseñarían en el marco del GIRSAR. Cuentan con experiencia en la comunicación con los organismos provinciales de catastro, en la identificación de situaciones de reasentamiento y afectación de activos, intervención durante la formulación para evitarlos (rediseñando el Subproyecto) o compensarlos adecuadamente, según la normativa, e informando a los afectados.

La Dirección tiene entre sus profesionales a dos abogadas, especialistas en planes de reasentamiento involuntario y afectación de activos. Ambas cuentan con amplia experiencia tanto en el desarrollo de PAA y PRI, como en la asistencia técnica y capacitación a los equipos de formulación de la DIPROSE en los aspectos vinculados al desarrollo de los mismos, de acuerdo a lo establecido por el Manual Ambiental y Social de la DIPROSE y la salvaguarda correspondiente. La Dirección también cuenta con tres profesionales sociales, dos socióloga/os y una antropóloga, con experiencia en la evaluación social de proyectos de infraestructura pública, incluyendo la formulación, tanto de planes específicos de afectación de activos y reasentamiento involuntario, como de medidas de gestión de impactos por afectación de activos.

Además, cuando es necesario se contratan especialistas ad hoc para desempeñarse durante la formulación de Subproyectos específicos. Para la ejecución de los mismos se define en el presupuesto del PGAS la contratación de un Gestor Social del Territorio (GST) que verifique las medidas definidas en el Plan de Reasentamiento, incluyendo a su vez la contratación de otros profesionales que se requieran (p.e. escribanos, topógrafos, abogados, censistas, asistentes sociales).

# Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR) - Programa P162316 - Marco de Gestión Ambiental y Social

## Anexo 8 - Marco de Política de Reasentamiento

### APÉNDICE V. ANÁLISIS DE LA OP 4.12 Y LA NORMATIVA NACIONAL

Requisitos de la OP 4.12	Legislación Nacional	Comentarios en base al Estudio de Brechas BM de 2011	Observaciones	Medidas para salvar la brecha entre la normativa y la OP 4.12
1. Identificar y determinar las necesidades de expropiación	Surge de las labores y justificaciones técnicas que sustentan el programa y la necesidad de expropiación en la ley respectiva. No está reglamentado.	Se encuentra cubierto con los procedimientos legales y formalidad del trámite parlamentario. Las leyes pueden ser revisadas en sede judicial respecto a la utilidad pública cuando son arbitrarias. Es consistente.	Es concordante.	N/A
2. Catastro preliminar	Toda expropiación se realiza en base a los planos de diseño de obra del proyecto, que requieren un catastro previo para determinar las parcelas afectadas. Para que sea efectiva la vía de avenimiento, se requieren títulos perfectos, correspondiendo la vía judicial cuando ellos sean defectuosos. Declarada por ley de utilidad pública, se inscriben en los registros de la propiedad inmueble y catastro parcelario, tratándose de inmuebles. No aplica para los bienes muebles ni muebles registrables (salvo caso de requisición).	Es consistente.	Es concordante.	N/A
3. Derechos de personas sujetas a expropiación	Son cubiertos por la Constitución Nacional, artículo 17 y Ley 21.449. La interpretación jurisprudencial y doctrinaria es amplia respecto al concepto de propiedad.	Es consistente.	Es concordante.	N/A
4. Consulta Previa	No contemplada en el régimen específico de la Ley 21.449. Puede inferirse de otras normas en forma indirecta (Ley 25.675, derecho a la participación y acceso a la información en materia ambiental, también en Decreto 1172/03 sobre Acceso a la Información). En sentido más estrecho para cuestiones ambientales, rige también la Ley 25.831.	Si bien existen los instrumentos, cabe una aplicación más uniforme y sistemática de los mismos en las instancias previas al proyecto. Se sugiere incluirla en las primeras etapas de evaluación de los proyectos de manera de anticipar las acciones de gestión ambiental y social.	No es concordante, se proponen medidas en el MPR.	Esto se realizará a través de mecanismos de socialización y consulta previstos tanto en el MGAS como en el presente documento.
5. Información a propietarios y residentes a ser relocalizados	En los casos de aplicación de la Ley 21.499, rigen sus provisiones específicas y la normativa descripta en punto 4.	Se cumple con medidas administrativas.	No es concordante, se proponen medidas en el	En cuanto a los procesos de reasentamiento, se llevará a cabo un modelo de abordaje que supone un trabajo continuo con las unidades sociales afectadas en todas las etapas,

Requisitos de la OP 4.12	Legislación Nacional	Comentarios en base al Estudio de Brechas BM de 2011	Observaciones	Medidas para salvar la brecha entre la normativa y la OP 4.12
6. Censos, estudios socio-económicos y fecha de corte			MPR.	articulando un conjunto de iniciativas a desarrollar antes, durante y después del momento de la afectación y/o traslado, entendiendo al reasentamiento como un proceso de largo plazo.
	Se encaran por la práctica administrativa, según el tipo y naturaleza del proyecto. La fecha de corte para los censos, depende de cada proyecto en particular Pueden formar parte de los EIA en la medida en que sean requeridos en los TDR. También pueden resultar de medidas de gestión administrativa por parte de reparticiones especializadas en política social en articulación con órganos expropiantes, a solicitud de estos. No se rige por una sola norma, sino que surge de las misiones y funciones del Ministerio de Desarrollo Social. El procedimiento expropiatorio, sea por juicio o avenimiento, involucra necesariamente la interrelación de los aspectos físicos, fiscales, jurídicos y económicos que informan los sistemas catastrales territoriales de cada provincia ordenados conforme la Ley 26.209, los registros de la propiedad locales (Ley 17801), los procesos de avalúo técnico del TTN y el diseño de obra según en comitente o el proyectista.	Se sugiere incluir como práctica sistemática de EIA.	No es concordante, se proponen medidas en el MPR.	El MPR prevé llevar a cabo un censo detallado de las unidades sociales (personas, familias y unidades económicas) residentes en los predios del área afectada por el reasentamiento involuntario. El objetivo del mismo es contar con la información que permita conocer las características demográficas, sociales, económicas y culturales de propietarios y residentes en las tierras que demanda el proyecto afectados por el reasentamiento involuntario. El censo debe involucrar a todas las personas que residen o tengan derechos sobre los inmuebles afectados cualquiera sea su condición jurídica. La realización del censo define una fecha límite ("fecha de corte") para el reconocimiento de derechos generados por el reasentamiento. Por ello, se informará debidamente a la población sobre la existencia de esa fecha.
7. Análisis de vulnerabilidad	No es un procedimiento reglado. Es ejecutado por las reparticiones especializadas. Se encara por práctica administrativa, según el tipo de proyecto y nivel de complejidad y tipo de población afectada. En el caso del Matanza Riachuelo, la Sentencia en la causa —Mendoza— ha impuesto este tipo de análisis en algunos de los componentes del Plan de Saneamiento (a cargo del Ministerio de Salud).	Se sugiere incluir como práctica sistemática de EIA.	No es concordante, se proponen medidas en el MPR.	El censo y diagnóstico socioeconómico que debe realizarse para cada RP poseen como uno de sus objetivos la identificación de grupos de población o unidades sociales que podrían resultar particularmente vulnerables frente al reasentamiento.
8. Soluciones alternativas y selección	Se incorpora en la etapa de diseño del proyecto como buena práctica. No siempre es exigencia estricta de la normativa, aunque la Ley de Obras Públicas 13.064 tiene referencia a los informes y presupuestos emitidos por organismos técnicos que sustentan la obra. Las alternativas se encuadran en los estudios de factibilidad técnico y financiera del proyecto.	Se encara en la práctica administrativa en la etapa de diseño, como buena práctica y en particular con obras que cuentan con financiamiento externo. Los marcos más recientes de EIA contemplan la necesidad de evaluar alternativas.	No es concordante, se proponen medidas en el MPR.	Entre los principios del MPR se establece que se deberá minimizar el desplazamiento de población. Dado los impactos negativos que genera el desplazamiento involuntario, siempre que sea posible se lo evitará o se minimizará. Para esto, se deberán analizar alternativas que resulten social, ambiental, económica y técnicamente viables, a fin de proponer aquella que cause la menor afectación.

Requisitos de la OP 4.12	Legislación Nacional	Comentarios en base al Estudio de Brechas BM de 2011	Observaciones	Medidas para salvar la brecha entre la normativa y la OP 4.12
9. Valuación de activos afectados	Conforme directivas del Tribunal de Tasaciones. Se considera el criterio de valor de reposición, como aproximación a los valores de mercado.	Se cumple con medidas administrativas.	Es concordante.	Es importante mencionar que, en los casos de interés social, se llevará acabo el mismo procedimiento de tasación, el cual estará exceptuado de los aranceles relativos al pago de servicios de asesoramiento y avalúo que presta dicho organismo, teniendo en cuenta las particularidades especiales que se desprendan del carácter informal de las tenencias y mejoras.
10. declaración de utilidad pública	Requisito esencial de la Ley y la Constitución Nacional.	Es consistente.	Es concordante.	N/A
11. Negociación con propietarios y afectados	Previsto en Ley 21.449 como avenimiento.	Es consistente.	Es concordante.	N/A
12. Tipo de indemnización	Justa, integral y previa a la expropiación.	Es consistente.	Es concordante.	N/A
13. Mecanismos de disputa disponibles	Juicio de Expropiación.	Es consistente.	Es concordante.	N/A
14. Indemnización a arrendatarios y otros ocupantes con título legal	La reparación es plena e integral respecto de todo título de propiedad suficiente. Se requieren títulos perfectos, correspondiendo la vía judicial cuando ellos sean defectuosos.	Consistencia parcial.	No es concordante, se proponen medidas en el MPR.	Los PR deberán establecer las diferentes alternativas de compensación y asistencia, incluyendo para los casos de afectaciones a arrendatarios y otros ocupantes, tanto formales como informales
15. Lucro cesante	No integra el valor indemnizable. En algunos casos se puede reconocer un precio por valor "llave" o "empresa en marcha".	Consistencia parcial. En casos de suma pobreza, no incluir el lucro cesante puede ser equivalente a la privación de fuentes de ingreso, siendo de aplicación medidas transitorias de apoyo (Involuntary Resettlement Sourcebook, p.109).	No es concordante, se proponen medidas en el MPR.	Los PR deberán establecer las diferentes alternativas de compensación existentes, incluyendo los casos de afectaciones de la actividad económica y medios de subsistencia (incluso el lucro cesante) que deberán ser implementadas tanto para un propietario como para un arrendatario o poseedor informal.
16. Concepto de indemnización integral (Valor objetivo de los activos)	El artículo 10 de la Ley 21499 y definiciones del TTN (7.1.) sobre valor objetivo.	El concepto de indemnización integral es compatible con la definición de la P.O..4.12 las normas y métodos de valuación según el TTN, variarán según se trata de tierras solas, con estructuras o construcciones incorporadas y de acuerdo sea la expropiación total o parcial. La Norma TTN 3.1 contempla la utilización del valor comparativo en los casos en donde existe un mercado. En ausencia de un mercado, la Norma TTN 4.1 acepta utilizar el método	Es concordante.	N/A



Requisitos de la OP 4.12	Legislación Nacional	Comentarios en base al Estudio de Brechas BM de 2011	Observaciones	Medidas para salvar la brecha entre la normativa y la OP 4.12
17. Depreciación		del costo de reposición de una construcción, incluyendo la sumatoria de los gastos necesarios para edificar un inmueble de idénticas características. En este último caso se aplicará un coeficiente de depreciación en función del uso del inmueble.		
	Se establece a los efectos de la valuación, una disminución en concepto de depreciación del valor del bien por uso.	No existe compatibilidad entre la norma argentina y la PO 4.12.	No es concordante, se proponen medidas en el MPR.	El MPR establece que para los procesos que se puedan implementar bajo el proyecto se utilizará el valor de reposición.
18. expropiación total o parcial	Se encuentra contemplada en la ley de expropiaciones y en la Jurisprudencia. Los criterios son flexibles en cuanto a la utilidad de las porciones remanentes no expropiadas, en función de su mayor o menor utilidad. El expropiado puede acudir a la figura de la expropiación inversa por la totalidad del bien, cuando esta no es apta o viable para su uso económico habitual.	Es consistente.	Es concordante.	Al igual que para la imposición de servidumbres, la BP 4.12 establece que cuando la persona afectada por la expropiación no acepte el monto ofrecido en concepto de indemnización, la adquisición de tierras y de activos deberá proceder solamente en aquellas circunstancias en donde se haya depositado previamente fondos iguales al monto ofrecido como indemnización junto a un 10% adicional, a fin de satisfacer los requerimientos fiduciarios del Banco. Ello consistirá un requisito del PR en los casos en los que no existe avenimiento.
19. Procedimiento de adquisición de activos	Por acuerdo voluntario o avenimiento con el acuerdo del propietario, o mediante juicio expropiatorio. Para el caso del avenimiento se paga un 10% por encima de la valuación del TTN.	Es consistente.	Es concordante	Al igual que para la imposición de servidumbres, la BP 4.12 establece que cuando la persona afectada por la expropiación no acepte el monto ofrecido en concepto de indemnización, la adquisición de tierras y de activos deberá proceder solamente en aquellas circunstancias en donde se haya depositado previamente fondos iguales al monto ofrecido como indemnización junto a un 10% adicional, a fin de satisfacer los requerimientos fiduciarios del Banco. Ello consistirá un requisito del PR en los casos en los que no existe avenimiento.
20. Valor de actividades económicas y del	Ver ítem 15 (supra) La jurisprudencia reconoce el valor "llave" y "empresa en marcha" en algunos casos, pero no lucro cesante. Para comunidades	Ver consistencia de la OP 4.12 en los casos comprendidos en el párrafo 6 c).	No es concordante, se proponen	Los PR deberán establecer las diferentes alternativas de compensación existentes, incluyendo para los casos de afectaciones de

Requisitos de la OP 4.12	Legislación Nacional	Comentarios en base al Estudio de Brechas BM de 2011	Observaciones	Medidas para salvar la brecha entre la normativa y la OP 4.12
medio de vida	vulnerables, el lucro cesante podría asimilarse a la pérdida de medios de vida.		medidas en el MPR.	la actividad económica y medios de subsistencia (incluso el lucro cesante) que deberán ser implementadas tanto para un propietario como para un arrendatario o poseedor informal.
21. Mecanismos de reclamo	Juicio expropiatorio y mecanismo de apelaciones.	Consistencia con OP 4.12. para todos los casos de afectación a la propiedad entendida en sentido amplio.	Es concordante.	Si bien hay consistencia con la OP 4.12, se incorporan en este MPR otras instancias a través de los cuales los afectados por el proyecto, y particularmente por el reasentamiento, podrán presentar reclamos.
22. Evaluación expost y mecanismos de seguimiento posterior	No contemplado en la Ley 21.449.	No contemplado en la legislación, debiendo utilizarse los marcos normativos específicos para el proyecto, o los términos de la autorización en función de otras normas de tipo ambiental con exigencias de seguimiento y monitoreo.	No es concordante, se proponen medidas en el MPR.	El MPR incorpora lineamientos para llevar a cabo el monitoreo de las acciones previstas en un PR y su evaluación ex post.

**Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR) -  
Programa P162316 - Marco de Gestión Ambiental y Social**

**Anexo 8 – Marco de Política de Reasentamiento**

**APÉNDICE VI. NOTAS DE DIFUSIÓN Y CORREOS ELECTRÓNICOS DE LA CONSULTA DEL MPR REMITIDAS A  
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES**

---

2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria



BUENOS AIRES, 18 de enero de 2018

SEÑOR GERENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle copia del Marco de Política de Reasentamiento (MPR), elaborado en el marco del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR), que será ejecutado por esta Unidad.

El MPR es un Anexo del Marco de Gestión Ambiental y Social, en donde se establecen los procedimientos para gestionar el reasentamiento involuntario de población o la compensación y apoyo por pérdidas de terrenos u otros activos económicos, en el caso que alguna de las actividades del Programa así lo requiriera, cuyo texto puede ser consultado en el siguiente link:

<http://www.ucar.gob.ar/index.php/institucional/manuales-reglamentos-y-salvaguardas/2628-anexo-8-marco-de-politica-de-reasentamiento-girsar>

Se recibirán las inquietudes y observaciones sobre el MPR hasta el 25 de enero, a través de los siguientes medios:

- Correo electrónico: fherandez@ucar.gov.ar
- Web: <http://www.ucar.gob.ar/index.php/contacto>
- Nota: UCAR – Av. Belgrano 456, C1092AAR, CABA

El proceso de consulta se inició en los primeros días del mes de diciembre de 2017, con una convocatoria amplia para que organismos del Estado y otros actores y partes interesadas tengan la oportunidad de compartir su retroalimentación. Como parte de dicho proceso de consulta el 18 de diciembre se publicó en la página web de la UCAR ([www.ucar.gob.ar](http://www.ucar.gob.ar)) la versión preliminar del Marco de Gestión Ambiental y Social y todos sus anexos. Durante la implementación del Programa habrá otras instancias de participación y consulta.

Los resultados de estas instancias serán documentados y las modificaciones y/o recomendaciones que surjan de las mismas serán incorporadas a la versión final del MGAS y sus Anexos, según corresponda.

Sin otro particular, lo saludo atentamente,

AL SEÑOR  
GERENTE DE ASOCAMEN  
GUILLERMO SAN MARTÍN  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D.

  
Francisco M. Hernández

Jefe de Sector Ambiental y Social  
Unidad de Formulación de Proyectos  
Área de Prospectiva y Formulación de Proyectos  
UCAR

BUENOS AIRES, 18 de enero de 2018

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle copia del Marco de Política de Reasentamiento (MPR), elaborado en el marco del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR), que será ejecutado por esta Unidad.

El MPR es un Anexo del Marco de Gestión Ambiental y Social, en donde se establecen los procedimientos para gestionar el reasentamiento involuntario de población o la compensación y apoyo por pérdidas de terrenos u otros activos económicos, en el caso que alguna de las actividades del Programa así lo requiriera, cuyo texto puede ser consultado en el siguiente link:

<http://www.ucar.gob.ar/index.php/institucional/manuales-reglamentos-y-salvaguardas/2628-anexo-8-marco-de-politica-de-reasentamiento-girsar>

Se recibirán las inquietudes y observaciones sobre el MPR hasta el 25 de enero, a través de los siguientes medios:

- Correo electrónico: [fernandez@ucar.gov.ar](mailto:fernandez@ucar.gov.ar)
- Web: <http://www.ucar.gob.ar/index.php/contacto>
- Nota: UCAR – Av. Belgrano 456, C1092AAR, CABA

El proceso de consulta se inició en los primeros días del mes de diciembre de 2017, con una convocatoria amplia para que organismos del Estado y otros actores y partes interesadas tengan la oportunidad de compartir su retroalimentación. Como parte de dicho proceso de consulta el 18 de diciembre se publicó en la página web de la UCAR ([www.ucar.gob.ar](http://www.ucar.gob.ar)) la versión preliminar del Marco de Gestión Ambiental y Social y todos sus anexos. Durante la implementación del Programa habrá otras instancias de participación y consulta.

Los resultados de estas instancias serán documentados y las modificaciones y/o recomendaciones que surjan de las mismas serán incorporadas a la versión final del MGAS y sus Anexos, según corresponda.

Sin otro particular, lo saludo atentamente,

AL SEÑOR  
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD RURAL  
DE CORONEL BRANDSEN  
HUGO CARRICABURU  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D.



Francisco M. Hernández

Jefe de Sector Ambiental y Social  
Unidad de Formulación de Proyectos  
Área de Prospectiva y Formulación de Proyectos  
UCAR

BUENOS AIRES, 18 de enero de 2018

SEÑOR COORDINADOR:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle copia del Marco de Política de Reasentamiento (MPR), elaborado en el marco del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR), que será ejecutado por esta Unidad.

El MPR es un Anexo del Marco de Gestión Ambiental y Social, en donde se establecen los procedimientos para gestionar el reasentamiento involuntario de población o la compensación y apoyo por pérdidas de terrenos u otros activos económicos, en el caso que alguna de las actividades del Programa así lo requiriera, cuyo texto puede ser consultado en el siguiente link:

<http://www.ucar.gob.ar/index.php/institucional/manuales-reglamentos-y-salvaguardas/2628-anexo-8-marco-de-politica-de-reasentamiento-girsar>

Se recibirán las inquietudes y observaciones sobre el MPR hasta el 25 de enero, a través de los siguientes medios:

- Correo electrónico: [fhernandez@ucar.gov.ar](mailto:fhernandez@ucar.gov.ar)
- Web: <http://www.ucar.gob.ar/index.php/contacto>
- Nota: UCAR – Av. Belgrano 456, C1092AAR, CABA

El proceso de consulta se inició en los primeros días del mes de diciembre de 2017, con una convocatoria amplia para que organismos del Estado y otros actores y partes interesadas tengan la oportunidad de compartir su retroalimentación. Como parte de dicho proceso de consulta el 18 de diciembre se publicó en la página web de la UCAR ([www.ucar.gob.ar](http://www.ucar.gob.ar)) la versión preliminar del Marco de Gestión Ambiental y Social y todos sus anexos. Durante la implementación del Programa habrá otras instancias de participación y consulta.

Los resultados de estas instancias serán documentados y las modificaciones y/o recomendaciones que surjan de las mismas serán incorporadas a la versión final del MGAS y sus Anexos, según corresponda.

Sin otro particular, lo saludo atentamente,

AL SEÑOR  
COORDINADOR DEL CLUSTER  
GANADERO BOVINO DE MENDOZA  
MAURICIO LÓPEZ

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D.



Francisco M. Hernández

Jefe de Sector Ambiental y Social  
Unidad de Formulación de Proyectos  
Área de Prospectiva y Formulación de Proyectos  
UCAR



BUENOS AIRES, 18 de enero de 2018

ESTIMADA COORDINADORA:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle copia del Marco de Política de Reasentamiento (MPR), elaborado en el marco del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR), que será ejecutado por esta Unidad.

El MPR es un Anexo del Marco de Gestión Ambiental y Social, en donde se establecen los procedimientos para gestionar el reasentamiento involuntario de población o la compensación y apoyo por pérdidas de terrenos u otros activos económicos, en el caso que alguna de las actividades del Programa así lo requiriera, cuyo texto puede ser consultado en el siguiente link:

<http://www.ucar.gob.ar/index.php/institucional/manuales-reglamentos-y-salvaguardas/2628-anexo-8-marco-de-politica-de-reasentamiento-girsar>

Se recibirán las inquietudes y observaciones sobre el MPR hasta el 25 de enero, a través de los siguientes medios:

- Correo electrónico: fherandez@ucar.gov.ar
- Web: <http://www.ucar.gob.ar/index.php/contacto>
- Nota: UCAR – Av. Belgrano 456, C1092AAR, CABA

El proceso de consulta se inició en los primeros días del mes de diciembre de 2017, con una convocatoria amplia para que organismos del Estado y otros actores y partes interesadas tengan la oportunidad de compartir su retroalimentación. Como parte de dicho proceso de consulta el 18 de diciembre se publicó en la página web de la UCAR ([www.ucar.gob.ar](http://www.ucar.gob.ar)) la versión preliminar del Marco de Gestión Ambiental y Social y todos sus anexos. Durante la implementación del Programa habrá otras instancias de participación y consulta.

Los resultados de estas instancias serán documentados y las modificaciones y/o recomendaciones que surjan de las mismas serán incorporadas a la versión final del MGAS y sus Anexos, según corresponda.

Sin otro particular, lo saludo atentamente,

A LA COORDINADORA DEL CLUSTER  
PORCINO DAIREAUX-HENDERSON  
SOFÍA NIVEN  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D.



Francisco M. Hernández

Jefe de Sector Ambiental y Social  
Unidad de Formulación de Proyectos  
Área de Prospectiva y Formulación de Proyectos  
UCAR

BUENOS AIRES, 18 de enero de 2018

ESTIMADO PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle copia del Marco de Política de Reasentamiento (MPR), elaborado en el marco del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR), que será ejecutado por esta Unidad.

El MPR es un Anexo del Marco de Gestión Ambiental y Social, en donde se establecen los procedimientos para gestionar el reasentamiento involuntario de población o la compensación y apoyo por pérdidas de terrenos u otros activos económicos, en el caso que alguna de las actividades del Programa así lo requiriera, cuyo texto puede ser consultado en el siguiente link:

<http://www.ucar.gob.ar/index.php/institucional/manuales-reglamentos-y-salvaguardas/2628-anexo-8-marco-de-politica-de-reasentamiento-girsar>

Se recibirán las inquietudes y observaciones sobre el MPR hasta el 25 de enero, a través de los siguientes medios:

- Correo electrónico: ffernandez@ucar.gov.ar
- Web: <http://www.ucar.gob.ar/index.php/contacto>
- Nota: UCAR – Av. Belgrano 456, C1092AAR, CABA

El proceso de consulta se inició en los primeros días del mes de diciembre de 2017, con una convocatoria amplia para que organismos del Estado y otros actores y partes interesadas tengan la oportunidad de compartir su retroalimentación. Como parte de dicho proceso de consulta el 18 de diciembre se publicó en la página web de la UCAR ([www.ucar.gob.ar](http://www.ucar.gob.ar)) la versión preliminar del Marco de Gestión Ambiental y Social y todos sus anexos. Durante la implementación del Programa habrá otras instancias de participación y consulta.

Los resultados de estas instancias serán documentados y las modificaciones y/o recomendaciones que surjan de las mismas serán incorporadas a la versión final del MGAS y sus Anexos, según corresponda.

Sin otro particular, lo saludo atentamente,

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA  
SOCIEDAD RURAL GENERAL PAZ  
PABLO EDWARDS  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D.



Francisco M. Hernández

Jefe de Sector Ambiental y Social  
Unidad de Formulación de Proyectos  
Área de Prospectiva y Formulación de Proyectos  
UCAR

libretas

Escriba una pregunta

---

**Consulta Proyecto Marco de Reasentamiento - Proyecto GIRSAR - UCAR - Agroindustria**  
Francisco Miguel Hernández

Mensaje reenviado el 18/01/2018 05:50 p.m.  
Enviado: jueves 18/01/2018 05:46 p.m.  
Para: hugocarricaburu@hotmail.com

Mensaje | Nota Hugo Carricaburu - SR Brandsen.pdf (325 KB)

Estimado Hugo,

Tal como le comenté telefónicamente, le hago llegar la información relativa a la consulta del Marco de Política de Reasentamiento (MPR) del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR), que será ejecutado por esta Unidad.

El MPR es un Anexo del Marco de Gestión Ambiental y Social, en donde se establecen los procedimientos para gestionar el reasentamiento involuntario de población o la compensación y apoyo por pérdidas de terrenos u otros activos económicos, en el caso que alguna de las actividades del Proyecto así lo requiriera, cuyo texto puede ser consultado en el siguiente link:

<http://www.ucar.gov.ar/index.php/institucional/manuales-reglamentos-y-salvaguardas/2628-anexo-8-marco-de-politica-de-reasentamiento-girsar>

Se recibirán las inquietudes y observaciones sobre el MPR hasta el 25 de enero, a través de los siguientes medios:

- Correo electrónico: fhernandez@ucar.gov.ar
- Web: <http://www.ucar.gov.ar/index.php/contacto>
- Nota: UCAR – Av. Belgrano 456, C1092AAR, CABA


El proceso de consulta se inició en los primeros días del mes de diciembre de 2017, con una convocatoria amplia para que organismos del Estado y otros actores y partes interesadas tengan la oportunidad de compartir su retroalimentación. Como parte de dicho proceso de consulta el 18 de diciembre se publicó en la página web de la UCAR ([www.ucar.gov.ar](http://www.ucar.gov.ar)) la versión preliminar del Marco de Gestión Ambiental y Social y todos sus anexos.

Los resultados de estas instancias serán documentados y las modificaciones y/o recomendaciones que surjan de las mismas serán incorporadas a la versión final del MGAS y sus Anexos, según corresponda.

Adjunto nota formal que será enviada por correo postal.

Por favor, confirmar la recepción de este mail.

Sin otro particular, lo saludo atentamente,



**MSc. Francisco Hernández**  
Jefe Sector Ambiental y Social  
Unidad Formulación de Proyectos  
Área Prospectiva y Formulación de Proyectos

Tel (011) 4349 - 0531 Int: 1531 | Av. Belgrano 456 - Piso 5 | C1092AAR | C.A. de Buenos Aires, Argentina | [www.ucar.gov.ar](http://www.ucar.gov.ar)

libretas

Escriba una pregunta

---

**RV: Consulta Proyecto Marco de Reasentamiento - Proyecto GIRSAR - UCAR - Agroindustria**  
Francisco Miguel Hernández

Enviado: jueves 18/01/2018 05:49 p.m.  
Para: ggerente@asocamen.com.ar

Mensaje | Nota Guillermo San Martín - ASOCAMEN.pdf (632 KB)

Estimado Guillermo,

Tal como le comenté telefónicamente, le hago llegar la información relativa a la consulta del Marco de Política de Reasentamiento (MPR) del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR), que será ejecutado por esta Unidad.

El MPR es un Anexo del Marco de Gestión Ambiental y Social, en donde se establecen los procedimientos para gestionar el reasentamiento involuntario de población o la compensación y apoyo por pérdidas de terrenos u otros activos económicos, en el caso que alguna de las actividades del Proyecto así lo requiriera, cuyo texto puede ser consultado en el siguiente link:

<http://www.ucar.gov.ar/index.php/institucional/manuales-reglamentos-y-salvaguardas/2628-anexo-8-marco-de-politica-de-reasentamiento-girsar>

Se recibirán las inquietudes y observaciones sobre el MPR hasta el 25 de enero, a través de los siguientes medios:

- Correo electrónico: fhernandez@ucar.gov.ar
- Web: <http://www.ucar.gov.ar/index.php/contacto>
- Nota: UCAR – Av. Belgrano 456, C1092AAR, CABA


El proceso de consulta se inició en los primeros días del mes de diciembre de 2017, con una convocatoria amplia para que organismos del Estado y otros actores y partes interesadas tengan la oportunidad de compartir su retroalimentación. Como parte de dicho proceso de consulta el 18 de diciembre se publicó en la página web de la UCAR ([www.ucar.gov.ar](http://www.ucar.gov.ar)) la versión preliminar del Marco de Gestión Ambiental y Social y todos sus anexos.

Los resultados de estas instancias serán documentados y las modificaciones y/o recomendaciones que surjan de las mismas serán incorporadas a la versión final del MGAS y sus Anexos, según corresponda.

Adjunto nota formal que será enviada por correo postal.

Por favor, confirmar la recepción de este mail.

Sin otro particular, lo saludo atentamente,



**MSc. Francisco Hernández**  
Jefe Sector Ambiental y Social  
Unidad Formulación de Proyectos  
Área Prospectiva y Formulación de Proyectos

Tel (011) 4349 - 0531 Int: 1531 | Av. Belgrano 456 - Piso 5 | C1092AAR | C.A. de Buenos Aires, Argentina | [www.ucar.gov.ar](http://www.ucar.gov.ar)



libretas

Escriba una pregunta

---

**RV: Consulta Proyecto Marco de Reasentamiento - Proyecto GIRSAR - UCAR - Agroindustria**  
Francisco Miguel Hernández

Enviado: Jueves 18/01/2018 05:50 p.m.  
Para: 'clusterganaderobovino@gmail.com'

Mensaje | Nota Mauricio Lopez - Cluster Ganadero Mendoza.pdf (325 KB)

Estimado Mauricio,

Tal como le comenté telefónicamente, le hago llegar la información relativa a la consulta del Marco de Política de Reasentamiento (MPR) del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR), que será ejecutado por esta Unidad.

El MPR es un Anexo del Marco de Gestión Ambiental y Social, en donde se establecen los procedimientos para gestionar el reasentamiento involuntario de población o la compensación y apoyo por pérdidas de terrenos u otros activos económicos, en el caso que alguna de las actividades del Proyecto así lo requiriera, cuyo texto puede ser consultado en el siguiente link:

<http://www.ucar.gov.ar/index.php/institucional/manuales-reglamentos-y-salvaguardas/2628-anexo-8-marco-de-politica-de-reasentamiento-girsar>

Se recibirán las inquietudes y observaciones sobre el MPR hasta el 25 de enero, a través de los siguientes medios:

- Correo electrónico: fhernandez@ucar.gov.ar
- Web: <http://www.ucar.gov.ar/index.php/contacto>
- Nota: UCAR – Av. Belgrano 456, C1092AAR, CABA


El proceso de consulta se inició en los primeros días del mes de diciembre de 2017, con una convocatoria amplia para que organismos del Estado y otros actores y partes interesadas tengan la oportunidad de compartir su retroalimentación. Como parte de dicho proceso de consulta el 18 de diciembre se publicó en la página web de la UCAR ([www.ucar.gov.ar](http://www.ucar.gov.ar)) la versión preliminar del Marco de Gestión Ambiental y Social y todos sus anexos.

Los resultados de estas instancias serán documentados y las modificaciones y/o recomendaciones que surjan de las mismas serán incorporadas a la versión final del MGAS y sus Anexos, según corresponda.


Adjunto nota formal que será enviada por correo postal.

Por favor, confirmar la recepción de este mail.

Sin otro particular, lo saludo atentamente,



Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de la Nación



UCAR  
Unidad Formulación de Proyectos

**MSc. Francisco Hernández**  
Jefe Sector Ambiental y Social  
Unidad Formulación de Proyectos  
Área Prospectiva y Formulación de Proyectos

Tel (011) 4349 - 0531 Int. 1531 | Av. Belgrano 456 - Piso 5 | C1092AAR | C.A. de Buenos Aires, Argentina | [www.ucar.gov.ar](http://www.ucar.gov.ar)

libretas

Escriba una pregunta

---

**Consulta Marco de Reasentamiento - Proyecto GIRSAR - UCAR - Agroindustria**  
Francisco Miguel Hernández

Respondió el 19/01/2018 02:06 p.m.

Enviado: viernes 19/01/2018 01:59 p.m.  
Para: 'sofinven@gmail.com'  
CC: 'Walter Martín'

Estimada Sofía,

Estuve en contacto con Walter Martín, quien me brindó su contacto.

Le hago llegar la información relativa a la consulta del Marco de Política de Reasentamiento (MPR) del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR), que será ejecutado por esta Unidad.

El MPR es un Anexo del Marco de Gestión Ambiental y Social, en donde se establecen los procedimientos para gestionar el reasentamiento involuntario de población o la compensación y apoyo por pérdidas de terrenos u otros activos económicos, en el caso que alguna de las actividades del Proyecto así lo requiriera, cuyo texto puede ser consultado en el siguiente link:

<http://www.ucar.gov.ar/index.php/institucional/manuales-reglamentos-y-salvaguardas/2628-anexo-8-marco-de-politica-de-reasentamiento-girsar>

Se recibirán las inquietudes y observaciones sobre el MPR hasta el 25 de enero, a través de los siguientes medios:

- Correo electrónico: fhernandez@ucar.gov.ar
- Web: <http://www.ucar.gov.ar/index.php/contacto>
- Nota: UCAR – Av. Belgrano 456, C1092AAR, CABA


El proceso de consulta se inició en los primeros días del mes de diciembre de 2017, con una convocatoria amplia para que organismos del Estado y otros actores y partes interesadas tengan la oportunidad de compartir su retroalimentación. Como parte de dicho proceso de consulta el 18 de diciembre se publicó en la página web de la UCAR ([www.ucar.gov.ar](http://www.ucar.gov.ar)) la versión preliminar del Marco de Gestión Ambiental y Social y todos sus anexos.

Los resultados de estas instancias serán documentados y las modificaciones y/o recomendaciones que surjan de las mismas serán incorporadas a la versión final del MGAS y sus Anexos, según corresponda.


Adjunto nota formal que será enviada por correo postal.

Por favor, confirmar la recepción de este mail. Cualquier duda o consulta estoy a disposición.

Sin otro particular, lo saludo atentamente,



Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de la Nación



UCAR  
Unidad Formulación de Proyectos

**MSc. Francisco Hernández**  
Jefe Sector Ambiental y Social  
Unidad Formulación de Proyectos  
Área Prospectiva y Formulación de Proyectos

libretas

Escriba una pregunta

**Consulta - Marco de Política de Reasentamiento - Proyecto gestión de Riesgos GIRSAR - UCAR - Agroindustria**  
Francisco Miguel Hernández  
Enviado: Lunes 22/01/2018 02:31 p.m.  
Para: 'pablogedwards@hotmail.com'

Mensaje | Nota Pablo Edwards - SR Gral Paz.pdf (321 KB)

Estimado Pablo,

En referencia al mail anterior, le hago llegar la información relativa a la consulta del Marco de Política de Reasentamiento (MPR) del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR), que será ejecutado por esta Unidad.

El MPR es un Anexo del Marco de Gestión Ambiental y Social, en donde se establecen los procedimientos para gestionar el reasentamiento involuntario de población o la compensación y apoyo por pérdidas de terrenos u otros activos económicos, en el caso que alguna de las actividades del Proyecto así lo requiriera, cuyo texto puede ser consultado en el siguiente link:

<http://www.ucar.gov.ar/index.php/institucional/manuales-reglamentos-y-salvaguardas/2628-anexo-8-marco-de-politica-de-reasentamiento-girsar>

Se recibirán las inquietudes y observaciones sobre el MPR hasta el 25 de enero, a través de los siguientes medios:

- Correo electrónico: fhernandez@ucar.gov.ar
- Web: <http://www.ucar.gov.ar/index.php/contacto>
- Nota: UCAR – Av. Belgrano 456, C1092AAR, CABA


El proceso de consulta se inició en los primeros días del mes de diciembre de 2017, con una convocatoria amplia para que organismos del Estado y otros actores y partes interesadas tengan la oportunidad de compartir su retroalimentación. Como parte de dicho proceso de consulta el 18 de diciembre se publicó en la página web de la UCAR ([www.ucar.gov.ar](http://www.ucar.gov.ar)) la versión preliminar del Marco de Gestión Ambiental y Social y todos sus anexos.

Los resultados de estas instancias serán documentados y las modificaciones y/o recomendaciones que surjan de las mismas serán incorporadas a la versión final del MGAS y sus Anexos, según corresponda.

Adjunto nota formal que será enviada por correo postal.

Por favor, confirmar la recepción de este mail.

Sin otro particular, lo saludo atentamente,



Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de la Nación

**MSc. Francisco Hernández**  
Jefe Sector Ambiental y Social  
Unidad Formulación de Proyectos  
Área Prospectiva y Formulación de Proyectos

Tel (011) 4349 - 0531 Int. 1531 | Av. Belgrano 456 - Piso 5 | C1092AAR | C.A. de Buenos Aires, Argentina | [www.ucar.gov.ar](http://www.ucar.gov.ar)

# Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR) - Programa P162316 - Marco de Gestión Ambiental y Social

## Anexo 8 – Marco de Política de Reasentamiento

### APÉNDICE VII. RESPUESTAS A LA CONSULTA DEL MPR

**Re: RV: Consulta Proyecto Marco de Reasentamiento - Proyecto GIRSAR - UCAR - Agroindustria**  
Cluster Ganadero Bovino de Mendoza [clusterganaderobovino@gmail.com]


Respondió el 23/01/2018 05:40 p.m.,  
Enviado: martes 23/01/2018 05:01 p.m.,  
Para: Francisco Miguel Hernández

Estimado Francisco

En un principio no encontramos ninguna objeción en los puntos del Anexo 8 del Marco de Gestión Ambiental y Social, de todas maneras se lo hice llegar a algunas instituciones que integran el Cluster Ganadero de Mendoza, si estas me hicieran alguna Observación te la haré llegar.

Saludos.-

Dr. Mauricio G. López Huerta



**Cluster**  
**GANADERO BOVINO**  
de Mendoza  
2625-458260  
[www.clusterganaderobovino.net](http://www.clusterganaderobovino.net)

El 18 de enero de 2018, 17:50, Francisco Miguel Hernández <[fhernandez@ucar.gov.ar](mailto:fhernandez@ucar.gov.ar)> escribió:

Estimado Mauricio,

Tal como le comenté telefónicamente, le hago llegar la información relativa a la consulta del Marco de Política de Reasentamiento (MPR) del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR), que será ejecutado por esta Unidad.

El MPR es un Anexo del Marco de Gestión Ambiental y Social, en donde se establecen los procedimientos para gestionar el reasentamiento involuntario de población o la compensación y apoyo por pérdidas de terrenos u otros activos económicos, en el caso que alguna de las actividades del Proyecto así lo requiriera, cuyo texto puede ser consultado en el siguiente link:

<http://www.ucar.gov.ar/index.php/institucional/manuales-reglamentos-y-salvaguardas/2628-anexo-8-marco-de-politica-de-reasentamiento-girsar>

Se recibirán las inquietudes y observaciones sobre el MPR hasta el 25 de enero, a través de los siguientes medios:



